

LOS MEDIOS DE CONTROL CONTABLE DE LAS FINANZAS REALES EN TIEMPOS DE FELIPE II: EL TENIENTE FRANCISCO GUTIÉRREZ DE CUÉLLAR Y LA CONTADURÍA MAYOR DE CUENTAS, 1560-1579

Carlos Javier de Carlos Morales

Antes de emprender su viaje de regreso a Castilla, en el verano de 1559, sabía Felipe II que encontraría innumerables problemas cuyo remedio no podía esperar demora. Desde luego, la resolución de las penurias del Erario real no admitía demasiada dilación, y así debió entenderlo el rey cuando tras convocar juntas que estudiaran la cuestión del déficit decidió, en noviembre de 1560, estando en Toledo, que las medidas de suspensión de pagos y conversión de débitos que había ordenado en 1557 -y que, debido a su ausencia no habían podido ser totalmente puestas en práctica-, fueran reanudadas de manera oficial junto a un nuevo plan de saneamiento financiero y pago de deudas. En cuanto a la situación de los organismos encargados de la gestión de las finanzas reales, como ya antes de partir a su casamiento y posterior coronación, en julio de 1554, Felipe había dejado firmadas sendas instrucciones que condujeran el funcionamiento del Consejo y de la Contaduría mayor de Hacienda y, en 1556 y 1557, había realizado diversos nombramientos -que habían conllevado la preponderancia del "partido ebolista"-, no se preveían ni rápidas reformas ni novedades inmediatas⁽¹⁾.

Por su parte, la Contaduría mayor de Cuentas, también como resultado de la *visita* del doctor Velasco había recibido, en julio de 1554, unas nuevas y amplias ordenanzas que registraban, completaban o corregían determinadas cuestiones de su misión de intervención contable de las actividades hacendísticas de la Corona ⁽²⁾. Hasta entonces, sus referentes normativos habían procedido de la ingente labor organizadora de los Reyes Católicos ⁽³⁾, tras la cual Carlos V solamente se había limitado a realizar pequeñas modificaciones: anular los derechos de los finiquitos del servicio de las Cortes, ordenar la revista de los pleitos judiciales contables por dos miembros del Consejo Real, y recortar la iniciativa de los Contadores mayores en la realización de descuentos de rentas ⁽⁴⁾. A grandes rasgos, el proceso que debían superar todos aquéllos que intervinieran de manera ordinaria o extraordinaria en la gestión de los ingresos y gastos reales -de motu proprio o por los llamamientos que la Contaduría mayor de Cuentas realizaba tras recibir las recetas de la otra Contaduría mayor- consistía en la confrontación

del cargo o sumas recibidas y la data o desembolsos efectuados, para establecer el alcance, generalmente favorable a la Hacienda real, tras cuyo cobro se despachaba el correspondiente finiquito y fenecimiento de cuentas.

La oportunidad de las disposiciones legales de julio de 1554 resultó indudable, ya que durante el reinado de Carlos V la responsabilidad de la Contaduría mayor de Cuentas había experimentado un considerable incremento, a consecuencia de la expansión de los arbitrios fiscales y de la diversificación del gasto ⁽⁶⁾. Sus artículos procuraron definir determinadas cuestiones procedimentales de la toma de cuentas y de la actuación de los dos Contadores mayores, sus lugartenientes (cuyo nombramiento se arrogaba la Corona), y los cuatro contadores de resultas: residir los mismos días y horas que el Consejo Real, servir con honestidad y sin intereses particulares; reunirse tres veces al año (20 al 30 de abril, 20 al 30 de agosto y 15 al 25 de diciembre) para elaborar una relación de cuentas pendientes; tomar las cuentas con rapidez y eficacia, persiguiendo los abusos y fraudes, exigiendo recaudos y ejecutando los alcances con diligencia; recoger o exigir todas las informaciones necesarias, y guardar correspondencia con la Contaduría mayor de Hacienda (a la que se atribuyó la resolución de dudas contables). La estabilidad institucional de los medios de control contable parecía, con las medidas de 1554, por tanto garantizada. Pero, a pesar de esta aparente claridad normativa, tras el regreso de Felipe II pronto afloraron los problemas pendientes y surgieron diversas contradicciones institucionales.

1.- LOS CONFLICTOS INSTITUCIONALES Y LOS NEGOCIOS PENDIENTES, 1560-1565

En 1560, la composición de la Contaduría mayor de Cuentas experimentó algunas novedades que desvelaron diversos conflictos y "negocios" que requirieron la atención de Felipe II. Poco antes de partir de los Países Bajos, el rey decidió cubrir la vacante surgida con la muerte de Juan de Vega, Contador mayor de Cuentas -además de presidente del Consejo Real-, nombrando el 5 de julio de 1559 a Pedro de Guzmán, I conde de Olivares ⁽⁶⁾. A principios del otoño del año siguiente se produjo la dejación del otro titular, Juan Manrique de Lara, cubierta por Pedro Niño de Ribera el 29 de septiembre de 1560 ⁽⁷⁾. Con ambas elecciones Felipe II respetaba la tradición no escrita de situar en la cúspide de las Contadurías mayores a personajes extraídos de la nobleza, para que disfrutaran de la quitación, ayudas de costa y derechos inherentes al cargo. Este era considerado como una merced, pues los titulares acostumbraban a delegar el ejercicio efectivo de sus facultades en los lugartenientes, cuya designación les había correspondido hasta la promulgación de las ordenanzas de 1554 ⁽⁸⁾. En éstas, si bien el rey se había arrogado el nombramiento de dichos oficiales, se hizo constar que esta atribución se haría efectiva una vez que se produjera la renovación de los dos Contadores mayores, circunstancia que se acababa de producir. De esta manera, Felipe II eligió como teniente de Olivares a Antonio de Eguino en 1560 ⁽⁹⁾, mientras que en la lugartenencia de Pedro Niño mantuvo a Juan Muñoz de Salazar ⁽¹⁰⁾. No obstante, Muñoz de Salazar falleció poco después, y su puesto fue ocupado a finales de este año o principios de 1561 por un caballero de Santiago y sobrino del Inquisidor general Valdés, Francisco Gutiérrez de Cuéllar, que habría de destacar entre los ministros de la Hacienda real de Felipe II ⁽¹¹⁾.

Las tensiones entre los Contadores mayores y los lugartenientes se manifestaron casi al mismo tiempo que tenían lugar los primeros relevos. Los tenientes Eguino y Muñoz de Salazar, amparados en su reciente independencia de los Contadores mayores, se creyeron suficientemente fuertes para denunciar que estos “han pretendido y pretender ynouar y de hecho an ynobado en la expedición de los negocios de la Contaduría mayor de Cuentas la orden y estilo que hasta aquí se tenía dellos”: especialmente, se quejaban de que Niño y Olivares habían tenido la iniciativa de elevar consultas al rey (“sin los tenientes nunca se ha visto consultar cosa alguna”), pretendían impedir que los libramientos y provisiones fueran despachados sin la rúbrica de los tenientes, y querían nombrar comisarios de cuentas, cobranzas y alcances a su albedrío; en suma, se trataba de acciones de “gouernación y administración de los negocios de cuentas” que habían sido siempre realizadas por los tenientes, como “personas de experiencia y noticia dellas y que asisten y trauajan continuamente en ellas”, sin intromisión de los Contadores mayores ⁽¹²⁾.

Pero, celoso de su nuevo cargo, y probablemente incómodo y dolido porque había tenido que aceptar un teniente que él no había elegido, como hasta 1554 había sido facultad del Contador mayor, Pedro Niño contestó a las críticas de Eguino y de Muñoz de Salazar alegando que tanto él como Olivares no hacían sino actuar según su preeminencia y ejercer las competencias expresadas en sus títulos de nombramiento ⁽¹³⁾. Al poco, Niño de Ribera reveló a Felipe II que las actitudes de los tenientes se habían caracterizado por el “mal despacho” y los “deffectos y negligencias”, pues habían incumplido diversos mandamientos establecidos en 1554: no atendían la orden de reunirse cada cuatro meses para revisar los libros de cargos, alcances y recetas, de manera que se habían producido graves quebrantos para la seguridad de la toma de cuentas; habían dejado “algunas veces de sacar cargos de las resultas, lo cual han enmendado los oficiales cuando despachan los finiquitos” y, además, “algunos de los thenientes a tomado los dineros de los alcances en su poder,... sin que entrasen en poder del receptor de V. Mt.”; finalmente, señalaba que los tenientes se habían ayudado de criados en la realización de diversas cuentas, resultado descuidos y yerros, y habían despachado provisiones de justicia sin señal del asesor letrado de la Contaduría ⁽¹⁴⁾.

La defunción de Muñoz de Salazar y su sustitución por Gutiérrez de Cuéllar no frenaron la discordia. Al contrario, las competencias entre Contadores mayores y tenientes se agudizaron antes del traslado de la Corte a Madrid, cuando los primeros insistieron en su análisis crítico de la situación de la fiscalización contable. Según la exposición que, en Toledo, fue elevada a Felipe II, existían diversos asuntos que deberían ser resueltos con prontitud: la toma de las cuentas del embajador en Génova, Gome Suárez de Figueroa, que llevaba años realizando *asientos y cambios*; la revisión de los gastos militares en la frontera de Málaga; la comprobación de los saldos de los Arteagas, banqueros que habían quebrado y debían satisfacer a sus acreedores; las cuentas de la recámara de la difunda reina Juana; los alcances y cargos de las actividades de Domingo de Orbea como tesorero; el control de los asientos y las libranzas que sobre ellos se despachaban, que también correspondía al *libro de la razón*; el conflicto por la revisión de las operaciones contables del Subsidio; y, finalmente, varias cuestiones que afectaban al propio funcionamiento de la Contaduría mayor, como la delegación de comisiones

para tomar cuentas, la ampliación del horario de las tardes, el nombramiento de nuevos oficiales y la prórroga de los contadores extraordinarios de resultas, el aumento de salario, etc.⁽¹⁵⁾.

De esta manera, los nuevos Contadores mayores no sólo manifestaron con los tenientes un conflicto de competencias por la dirección del organismo, sino que plantearon todas las medidas que consideraban prioritarias para mejorar la eficacia del organismo que encabezaban. Una de las más urgentes se refería a su desarrollo institucional, pues los cuatro contadores de resultas -dos de los cuáles estaban encargados de los libros-, no podían con el aluvión de trabajo que les llegaba⁽¹⁶⁾. Tras haberse expresado en diversos memoriales y consultas las posibles reformas, el 8 de julio de 1561, "entendiendo las muchas quantas y negocios que había por despachar... y que por no hauer suficiente número de contadores que las tomasen estaban suspensas...", Felipe II mandó acrecentar la plantilla, durante tres años, con "çinco contadores de resultas, que son Gabriel de Santa Cruz, Luis Ezcabias, Alonso de Montalbo, Francisco de Benabente de Puga, Francisco de Montoya..."⁽¹⁷⁾, y, días después, se crearon dos ordenadores de cuentas que preparasen las labores de los anteriores⁽¹⁸⁾.

Durante los años siguientes parece que las pugnas entre los Contadores mayores y los tenientes se sosegaron, y se atendieron los negocios y cuentas pendientes y se insistió en el control contable de los gastos de fronteras, armadas y ejércitos y de las operaciones con ingresos eclesiásticos⁽¹⁹⁾. No obstante, ni las reformas llevadas a cabo ni estas actividades satisficieron suficientemente a Felipe II. Tanto la resolución de los asuntos contables más problemáticos como la rectificación de los métodos administrativos, solamente se habían ido aplazando en el tiempo y, a comienzos de 1565, se encontraban tan latentes como un lustro antes⁽²⁰⁾.

Por entonces, el rey ya había adoptado importantes decisiones para encauzar la Contaduría mayor de Cuentas. A comienzos de 1563 Felipe II había ordenado a Juan Rodríguez de Figueroa, presidente del Consejo de Ordenes, que realizara una *visita* a la Contaduría mayor de Hacienda y a "algunas personas y ministros nuestros que an trattato las cosas" de la materia. Antes de partir a Monzón en el verano de 1564 -y siendo ya Figueroa presidente del Consejo Real-, amplió la investigación al Consejo de Hacienda, a la Contaduría mayor de Cuentas y al correo mayor⁽²¹⁾. Los resultados de esta *visita* pronto se dejaron sentir en los organismos encargados de la gestión de la Hacienda, pero en la Contaduría mayor de Cuentas hubieron de esperar todavía varios años, hasta que Espinosa condujo sus frutos hacia la formulación de las ordenanzas de 1569.

Mientras tanto, la desconfianza que la Contaduría mayor de Cuentas inspiraba en Felipe II alcanzó su cenit a comienzos de 1565. Dada la paralización de las gestiones contables, en enero de este año el rey ordenó a Juan de Isunza que se encargase de diligenciar todas las cuentas y resultas atrasadas:

"tuuiese a su cargo lo tocante a las resultas passadas, y ver y visitar y sacar de los libros y quantas, relaciones y memorias que haúa o hubiese de las quantas que hasta la dicha dacta [22 de enero] se haúa tomado y estaban por fenescer, assí del tiempo del Rey Católico don Fernando como del emperador y Rey Nuestro Señor... y de las quantas de los exércitos que su Magestad y V. Magestad hizieron y junta-

ron en Alemania, Flandes, Francia e Italia, que se han traído y estaban en la dicha Contaduría mayor, y el ordenar y despachar e enviar sobre ello y cada cosa y parte dello, las prouisiones y despachos neçesarios, así de llamamientos y apercibimientos como de lo que más fuese conuiniente y neçesario para tomar y feneçer las dichas quantas y resultas y cobrar los alcances dellas..." ⁽²²⁾.

Una comisión de este calibre solo podía estar justificada por el descrédito institucional o la incapacidad de la Contaduría para abordar sus atribuciones de intervención contable. Invadidas sus competencias de manera tan drástica y pública, como cabía esperar los Contadores mayores y sus tenientes reaccionaron entorpeciendo las actividades de Isunza "por todos los medios que han podido y pueden", negándose a colaborar, ocultando información, y efectuando diligencias en la contabilidad de los asuntos que se les querían arrebatar. Cuando el conflicto se puso en conocimiento de Felipe II, se sugirió que la Contaduría mayor de Cuentas e Isunza -a quien se daría tratamiento de teniente en las comunicaciones conjuntas- se repartieran las tareas objeto de litigio: a la primera deberían corresponder tomar todas las cuentas ordinarias y cobrar los alcances de los servicios del reino, moneda forera, cardenal de Burgos, Hernando de Ochoa y López del Campo, y así mismo todas las cuentas extraordinarias surgidas entre el 1 y el 22 de enero de 1565, mientras que a Isunza se habría de asignar las otras cuentas, resultas y cargos rezagados y pendientes de resolución⁽²³⁾. Habiendo adoptado probablemente esta disposición, las disputas se prolongaron a causa del sitio a ocupar por Isunza en las reuniones de la Contaduría y del lugar del documento en que debía firmarlo, y de su forma de percibir los alcances que se cobraren una vez tomadas las cuentas que le incumbían. Como cabía esperar en estas cuestiones de preeminencia y procedimiento, Felipe II decidió respaldar a Isunza ⁽²⁴⁾. Aunque carecemos de testimonios que nos permitan conocer el fruto de la comisión de Isunza -que fue nombrado consejero de Indias el 26 de septiembre de 1567 y falleció el 16 de noviembre de este mismo año ⁽²⁵⁾-, este episodio ilustra fehacientemente el marasmo de los asuntos que incumbían a la Contaduría mayor de Cuentas y el relajamiento en la aplicación de las ordenanzas de julio de 1554.

2.- LA CONTADURÍA MAYOR DE CUENTAS Y LAS REFORMAS DE DIEGO DE ESPINOSA

Desde que accedió a la presidencia del Consejo Real de Castilla en 1565, con el propósito de animar la realización de sus planes confesionales Diego de Espinosa impulsó una serie de modificaciones en las actividades y en la composición de los consejos ⁽²⁶⁾. Para poner en práctica sus objetivos en el ámbito hacendístico, se sirvió de la realización de la *visita* que había sido iniciada años antes, en cuyas diligencias el mismo Espinosa intervino dentro de una comisión del Consejo de Castilla formada en el verano de 1565 ⁽²⁷⁾. La condena de Francisco de Eraso -en abril de 1566 hubo de dejar los oficios de lugarteniente de la Contaduría mayor, secretario del Consejo de Hacienda y encargado de *tomar razón*- y el correlativo declive del "partido ebolista" en el gobierno ⁽²⁸⁾, fueron aprovechados por Espinosa para introducir a sus propios clientes y amigos y para adquirir la fidelidad o el respeto de los personajes que se ocupaban en la administración de las finanzas reales.

El control de las actividades de los ministros y oficiales se complementó con la reforma de las propias instituciones hacendísticas. En el Consejo de Hacienda se procuró imprimir orden institucional precisando sus funciones e introduciendo a letrados de su confianza, pero las medidas aplicadas tuvieron carácter transitorio y gozaron de poco éxito ⁽²⁹⁾. Aunque su cumplimiento tampoco habría de resultar demasiado estricto, al menos tuvo más continuidad la preceptiva legal que guiaría a la Contaduría mayor de Hacienda desde octubre de 1568. Tal y como se señalaba en su preámbulo, la gestación de estas normas se había justificado, durante el proceso de *visita*, al constatar que las ordenanzas de 1554 “no se han guardado, ni cumplido, ni executado enteramente, y como se deúa, assí por la desorden y exceso de algunos oficiales y personas a quien tocaua, como por el descuido y negligencia de los que las hauían de hacer cumplir, y executar...” ⁽³⁰⁾. Esta dinámica hubo de ser la misma que sirviera de móvil en las investigaciones que dieron lugar a las nuevas disposiciones legales que, un año después, se dictaron para la Contaduría mayor de Cuentas.

2.1. La visita y la elaboración de las ordenanzas de 1569

En efecto, con el propósito de dotar de mayor diligencia y eficacia a la administración de los recursos pecuniarios de la Corona, Espinosa, además de enmendar los organismos encargados de la gestión hacendística, procuró mejorar el funcionamiento de los medios de intervención contable. Al poco de ser nombrado presidente del Consejo Real, en septiembre de 1565 había emitido un breve análisis de la situación institucional de la Contaduría mayor de Cuentas que anunciaba las próximas e inexcusables reformas que resultarían de la *visita*:

“En la contaduría de cuentas hay mucha necesidad de que se ordene y prouea, porque los contadores mayores como tengo dicho a V. Mt. no residen. El conde de Olivares no asiste ni creo hace mucha falta su ausencia. Don Pedro Niño está en Toledo, que fue al fallecimiento de su madre y a componer su herencia. Francisco Gutiérrez de Cuéllar está en Segovia convalenciendo de una enfermedad grave que tuvo. Tiene buen entendimiento aunque no mucha intelligencia de los negocios por haber poco que está allí. Eguino lo mismo y está algo viejo y pesado. De manera que aquel tribunal conuiene proueer lo más de él de personas que tengan experiencia y que sepan mucho de aquel menester. En la visita se trata de todo, de que resultará como V. Mt. mande proueer lo que conuenga más a su real seruicio” ⁽³¹⁾.

Pocas semanas después Gutiérrez de Cuéllar retornaba a la corte y se reincorporaba a sus obligaciones en la Contaduría mayor de Cuentas. Durante los años anteriores apenas había desempeñado su tenencia, pues por mandato del Consejo de Órdenes había estado preso en Uclés entre el otoño de 1562 y finales de 1563. Tras salir de esta acusación libre y sin cargos, el 18 de noviembre de 1564 volvió a recuperar el ejercicio de su tenencia, que compaginó con el desempeño del oficio de contador mayor de las tres Ordenes militares, pero una enfermedad le postró hasta el otoño de 1565 ⁽³²⁾. Desde este momento, sus contactos con Espinosa fueron habituales y entre ambos se desarrolló una intensa relación. Para comprender el carácter de la confianza que se demostraron, hay que recordar que para seleccionar a los individuos que deberían prestar su colaboración y entendimiento en la aplicación de sus principios políticos, Espinosa acudió a los cír-

culos donde previamente había desarrollado su carrera y, en particular, se fijó en quienes había conocido durante su estancia en Sevilla, como oidor de la Audiencia. Ocupado en este destino entre 1554 y 1559, Espinosa sintonizó con la ideología ortodoxa del arzobispo sevillano e inquisidor general Fernando de Valdés, a cuyos clientes posteriormente protegió y aupó a puestos de responsabilidad. Parece presumible que Francisco Gutiérrez de Cuéllar, sobrino de Valdés, se benefició de esta circunstancia. Hacia 1568, la relación entre ambos había alcanzado un considerable vigor, tanto que en las informaciones que se elaboraron con ocasión del acceso de Espinosa a la diócesis de Sigüenza, Gutiérrez de Cuéllar actuó como testigo ⁽³³⁾. En correspondencia, Espinosa le hizo miembro del Consejo de Hacienda y contador mayor de la Orden de Santiago, y le encomendó misiones de suma confianza, como la toma de cuentas del virrey don García de Toledo ⁽³⁴⁾.

Previamente a la elaboración de las ordenanzas de 1569, Espinosa se informó convenientemente sobre la composición de la Contaduría mayor de Cuentas. Según Gutiérrez de Cuéllar, esta institución estaba formada de la siguiente manera: los dos Contadores mayores, Pedro Niño y Enrique de Guzmán, II conde de Olivares, que había sucedido a su padre, fallecido a finales de 1568, y que disfrutaban de 235.000 mrs. de quitación y diversos derechos de finiquitos; los tenientes Gutiérrez y Eguino, con 200.000 mrs. de quitación y varios derechos; dos contadores de resultas llamados *del libro* por su responsabilidad de custodiarlos (Santa Cruz y Tomás de Ayardi), con 100.000 mrs. de quitación; cinco mesas con dos contadores de resultas cada una (Agustín de Arceo y Francisco de Montoya, Juan de Galarza y Pedro de Liévana, Martín de Irigoyen y Francisco de Benavente, Domingo de Ayzmendi y Juan Bello, Azcáratí y Mercado), que también tenían 100.000 mrs. de salario; completaban la plantilla los dos ordenadores de cuentas creados a mediados de julio de 1561 (10.000 mrs. de salario y otros derechos), un secretario con 50.000 mrs. de salario y varios derechos, un fiscal con un salario de 300 ducados anuales, un asesor letrado (Salazar, con 50.000 mrs.), el relator y el tasador (ambos con 10.000 mrs. de quitación y algunos derechos), y dos porteros que recibían 18.915 mrs. de salario y otros complementos ⁽³⁵⁾. Además de ofrecerle el panorama institucional de la Contaduría mayor de Cuentas, Gutiérrez de Cuéllar transmitió al cardenal Espinosa diversas cuestiones que, a su juicio, deberían reformarse (las cualidades del fiscal, la supresión los ordenadores de cuentas, la reducción de los derechos ordinarios de finiquitos, la renovación trianual de los títulos de cuatro de los diez contadores de resultas, el aumento de los oficiales que integraban la plantilla) al mismo tiempo que se veían los resultados de la *visita* y que se promulgaban las próximas ordenanzas ⁽³⁶⁾.

Estas informaciones se incorporaron al resultado de las pesquisas realizadas durante la *visita*. Una vez terminadas las diligencias, para ocuparse de dictar los castigos oportunos y perfilar el contenido de las nuevas ordenanzas, Espinosa decidió convocar una junta. Junto al cardenal se reunieron Martín de Velasco, Suárez de Toledo y Francisco Hernández de Liévana, miembros del Consejo de Castilla, Francisco de Garnica, teniente de la Contaduría mayor de Hacienda, Gutiérrez de Cuéllar y los contadores de relaciones Peralta y Salablanca ⁽³⁷⁾. A pesar de que, tal y como se advierte en el preámbulo de las ordenanzas promulgadas en Madrid en agosto de 1569, la *visita* había pues-

to de manifiesto "omisión y descuido" en el cumplimiento de las normas que habían sido dictadas en julio de 1554 ⁽³⁸⁾, las sanciones impuestas no parece que fueran demasiado rigurosas, pues sólo tenemos constancia de la suspensión temporal de los contadores de resultas Luis de Escabias y Hernando de Serralta. Las nuevas ordenanzas contaban con una disposición principal (ley XXXVI) y cuatro complementarias (leyes XXXVII a XL) en las que se especificaban los aranceles que deberían percibir por la realización de determinados trabajos. "La orden que se ha guardar en la Contaduría mayor de Cuentas, acerca del ver y despachar de los negocios", se dividía en 36 capítulos cuyo contenido pretendía regular los procedimientos de intervención contable y las obligaciones del personal de la Contaduría mayor al mismo tiempo que se introducían reformas en su funcionamiento y cometidos. De esta manera, podemos reconstruir qué métodos y fases contables se pretendieron imponer: cada cuatro meses (en enero, mayo y septiembre) debería realizarse una relación de cuentas importantes (cap. 6), sin olvidar las cuentas extraordinarias pendientes (cap. 30) y las menudas y atinentes a fortalezas, bastimentos y fronteras (cap. 31), y con atención a las que se hubieren generado en los otros territorios de la Monarquía (cap. 20); el reparto de actividades y la tramitación de libranzas y provisiones habría de efectuarse en sesiones plenarias del tribunal, cuya dirección correspondía al Contador mayor más antiguo (cap. 7), que con su compañero resolvería las dudas cuando no hubiere unanimidad (cap. 35); anualmente los contadores de rentas de la Contaduría mayor de Hacienda tendrían que pasar las recetas sin dilaciones ni excusas, y ordenar a los que participaren en la gestión de los ingresos y gastos que las enviaran a los contadores de resultas, para ser contrastadas con las que constaban en el libro de la razón, cuyos encargados al efecto deberían transmitir relación de las gestiones que constaban en su oficio (caps. 15 y 18); las cuentas se darían bastando un llamamiento, para evitar costas y conseguir presteza (cap. 23), acompañadas de una declaración jurada del cargo y data (cap. 13); serían ordenadas de nuevo por los contadores de resultas al suprimirse los oficiales creados en julio de 1561 (cap. 3), operación que debería ser simultánea a la preparación de las dudas que presentaren (cap. 10); cada cuenta debería cerrarse por quien la emprendiera antes de comenzar otra nueva (cap. 12), lo que requeriría la creación de un libro en el que el escribano de cámara debería anotar quién y cuándo la empezaba (cap. 14), y la anotación clara de las enmiendas (cap. 21); en las cuentas de los lugares encabezados no sería necesario registrar el situado (cap. 22); en los libros de cargos, que se harían por duplicado y encuadernados, se inscribirían las operaciones sin esperar a los finiquitos; las cuentas fenecidas se inscribirían en un libro alfabético y cronológico (cap. 32), todos los libros tendrían que estar inventariados, numerados y custodiados (cap. 26); los nombramientos de comisarios de cuentas no deberían recaer en familiares ni deudos (cap. 8); las cuentas deberían tomarse con suficientes recaudos y, éstos, estimarse sin descuidos, so pena de sanción (caps. 17 y 24); los alcances deberían cobrarse con rapidez y ponerse a disposición del receptor (cap. 16), por oficiales ejecutores honestos y diligentes (cap. 27); el personal no podría excusar su asistencia (cap. 4) ni quedar ocioso por falta de sus compañeros de cuentas (cap. 25), debería ser puntual (cap. 9), guardar secreto de sus actividades y no dedicarse a asuntos privados ni interpuestos (cap. 28); los contadores de resultas habrían de acudir al tribunal de oidores de la Contaduría mayor de Hacienda para defender sus actuaciones (cap. 11), y tener buena comuni-

cación con los oficiales de ella para proceder al consumo de libranzas y juros (cap. 19); el fiscal daría cuenta los sábados de sus diligencias, que tendrían que constar en un libro (cap. 33), y el asesor letrado y el relator acudirían siempre que fueran llamados y no sólo un día a la semana (cap. 34). Finalmente, se anulaban los derechos de los finiquitos, que hasta entonces habían gozado los contadores mayores y tenientes (cap. 2) y, se ordenaba que se declarase el arancel que les correspondía a ellos y a los demás oficiales por determinadas operaciones contables, ya que con anterioridad no había sido establecido (cap. 36). Tales tarifas, que complementaban los salarios que percibían, afectarían a las cuentas que se presentaban sin ordenar (ley XL), a los cálculos referentes a los lugares encabezados o arrendados y a la moneda forera (ley XXXVII), cómputos de "cosas extraordinarias" como fronteras, guardas y tropas, y asientos y cambios (ley XXXVIII), y cuentas procedentes de la Cruzada (ley XXXIX).

Las ordenanzas de agosto de 1569 repetían, especificaban o enmendaban mandatos ya realizados en julio de 1554 y, como ocurría con los textos programáticos o legales, ni fueron la panacea esperada ni se acataron ni cumplieron con rigor. Los conflictos entre los Contadores mayores y los tenientes reverdecieron con ocasión de la interpretación del capítulo 7º, relativo a las competencias sobre provisiones y despachos y reparto de cuentas. Ambas esferas de la intervención contable únicamente encontraban motivo de avenencia cuando denunciaban que la anulación de los derechos de los finiquitos les había perjudicado, pues no encontraban que la reducción de sus ingresos se compensara con los nuevos aranceles, claramente insuficientes, o cuando exponían vehementemente los problemas que las nuevas ordenanzas no habían sabido o podido resolver: cuentas represadas y asuntos pendientes, vacantes, descuido en los libros y en la ordenación de cuentas, dilaciones en las notificaciones, y falta de correspondencia con otros tribunales; la situación se agravaba al tener que celebrar las reuniones fuera de palacio, en el monasterio de San Martín, dada la falta de espacio desde que se habían acomodado los príncipes de Bohemia ⁽³⁹⁾.

2.2. *La fiscalización de la Guerra de Granada (1569-1571)*

En la Navidad de 1568, la presión sobre la población morisca granadina -iniciada años antes por Pedro de Deza, presidente de la Chancillería y fiel servidor del cardenal Espinosa- provocaba el estallido de una revuelta cuya ascendente gravedad mantuvo en vilo a Felipe II durante más de dos años ⁽⁴⁰⁾. Los problemas que hubieron de ser superados tenían diversa índole. Además de hacer frente a la violencia desplegada por los moriscos en una orografía que no permitía llevar a cabo acciones militares definitivas, la ejecución de los planes de la Corona para debelar a los sublevados se encontró con una dificultad no esperada y que tuvo gran trascendencia en la expansión de la guerra: las agudas disputas que surgieron entre los propios ministros y generales encargados de reprimir la revuelta ⁽⁴¹⁾. Simultáneamente y en relación con la aparición de rémoras logísticas y estratégicas, se manifestaron preocupaciones económicas derivadas de la intendencia, del control de los gastos militares, y del destino de las haciendas que se incautaban a los moriscos que eran derrotados o que habían huido. Ante esta situación, después de que la extensión de la rebelión y el fracaso de Mondéjar para sofocarla hicieran a Felipe II tomar la decisión de colocar al mando a don Juan de Austria, en

abril de 1569, no podía seguir demorándose la adopción de medidas de control de los excesos y desórdenes ⁽⁴²⁾.

La fiscalización de las actividades concernientes a la intendencia militar se hizo todavía más imperiosa ya que don Juan, antes de emprender operaciones militares de envergadura, prefirió reclutar nuevas tropas y trasladar de Italia soldados ya curtidos en las vicisitudes y sufrimientos de la guerra. Al mismo tiempo, se hacían diligencias para aprontar 200.000 ducados -100.000 procedentes de la Casa de Contratación y otros 100.000 obtenidos de un *asiento* firmado por Lorenzo Spinola- destinados a financiar el esfuerzo bélico ⁽⁴³⁾. Para atajar el desbarajuste existente e impedir su propagación a la gestión de los nuevos fondos, Espinosa comisionó a Juan Briviesca de Muñatones, miembro de los consejos de Castilla y de Hacienda, "hombre hidalgo y, limpio, y en diversos tiempos de próspera y contraria fortuna", que a finales de abril de 1569 llegó al lado de don Juan ⁽⁴⁴⁾. La situación era sumamente preocupante: el desorden en la contabilidad, la malversación y la picaresca en los pagos a los soldados, y la alteración del precio y las cantidades de las vituallas y pertrechos que se compraban con cargo a la Hacienda real, eran prácticas frecuentes en el ejército que combatía en Granada ⁽⁴⁵⁾. Ante tales desmanes, durante los meses siguientes se realizaron una serie de nombramientos y reformas en la administración militar: el 27 de abril, Sancho de Córdoba, recibió título de veedor general; Francisco de Salablanca, el 28 de junio, de contador del sueldo; Francisco Guillamar, el 23 de octubre, de pagador del ejército; y Francisco de Villalobos, de comisario de muestras, el 4 de noviembre ⁽⁴⁶⁾.

No obstante, este rosario de títulos -demasiado separados entre sí- no tuvo la eficacia que cabía esperar ⁽⁴⁷⁾. En la corte, Espinosa no podía seguir tolerando que los desórdenes fueran tan notorios, especialmente en la contratación de las provisiones y en el pago de las mesadas. Briviesca y Salablanca eran hombres de su confianza, pero no parecía que su intervención hubiera puesto freno al desconcierto y los excesos. En el otoño, las circunstancias le obligaron a decidir enviar a Gutiérrez de Cuéllar a Granada. Enterado de su inminente viaje, en octubre Salablanca había escrito a Espinosa comentando la grave misión que debería llevar a cabo: "Acá he entendido la venida aquí del contador Francisco Gutiérrez de Cuéllar, que tengo por muy acertada prouisión, y conuiene mucho que se abrevie para que llegue a tiempo del avituallar la gente, donde tanto dinero se ha de gastar y de tanta diligencia y buen celo conviene usar" ⁽⁴⁸⁾. Dados los intereses creados en torno al manejo y distribución de los caudales que Felipe II dedicaba al esfuerzo militar, no resultó fácil para Gutiérrez de Cuéllar emprender sus cometidos. Como señalaba a los pocos días de haberse establecido en Granada, don Juan no se había mostrado demasiado interesado en la instrucción que portaba, y esperaba encontrar otras muchas trabas: "Entendido he que no se ha tomado bien mi venida por algunas personas y respectos, y que se procurará que yo tenga poca mano en los negocios" ⁽⁴⁹⁾. No obstante, terminando diciembre, tal y como Hurtado de Mendoza refiriera sin escatimar elogios, ya se hallaba "don Juan ocupado en la reformatión de la infantería, provisiones de vitualla y otras cosas, por medio e industria de Francisco Gutiérrez de Cuéllar, del consejo, a quien el Rey envió particularmente a mirar por su hacienda, caballero prudente, práctico en la administración de ella, bueno para todo" ⁽⁵⁰⁾.

La enfermedad y posterior fallecimiento de Briviesca de Muñatones a comienzos de

1570⁽⁵¹⁾, y la actitud del mismo Salablanca, más atento a reclamar sus derechos como contador del sueldo de la gente de guerra que a cortar los abusos y fraudes⁽⁵²⁾, hicieron aún más arduo el trabajo que hubo de afrontar Gutiérrez de Cuéllar. Mientras duró la resistencia de los moriscos -hasta el otoño de 1570-, sus principales preocupaciones procedieron de prevenir la aportación de dinero para pagar a las tropas y a los proveedores y, simultáneamente, evitar la malversación y el peculado en su administración⁽⁵³⁾. Para conseguir ambos propósitos, era fundamental proceder con diligencia a la toma de cuentas de todos aquellos personajes que tenían mano en los caudales empleados en Granada⁽⁵⁴⁾ o que intervenían en la confiscación de los bienes de los moriscos rebeldes⁽⁵⁵⁾. Con este fin, Gutiérrez solicitó al Consejo de Hacienda la ayuda de un oficial de la Contaduría mayor, petición que fue atendida a finales de enero de 1570⁽⁵⁶⁾.

Pero, a pesar de estas medidas y actividades administrativas, en la corte siguió entendiéndose que había poco control sobre los fondos dedicados al esfuerzo militar. Durante meses resonaría el "mal recaudo en los tocantes a los gastos de la guerra del reino de Granada, en mucho daño de la hacienda de su Mag.", que Gutiérrez de Cuéllar había puesto de manifiesto al revelar las prácticas fraudulentas del mismo proveedor general, Franciso de Solís, y su lugarteniente -y cuñado- Jerónimo de Prado, que en connivencia con los mercaderes alteraban al alza el precio de las vituallas y municiones para después repartir las plusvalías así generadas, no disponían de una contabilidad precisa y permitían desfalcos en la distribución del material, y habían introducido como comisarios a sus criados, siendo los oficios tan innecesarios como excesivos los salarios asignados⁽⁵⁷⁾. El propio don Juan se declaraba consciente de esta impresión, si bien se excusaba en la presencia de los oficiales que Espinosa había enviado para fiscalizar los dispendios del ejército que dirigía, cuya presencia y actitudes no le resultaban por otra parte nada gratas:

"En lo que toca al murmurarse allá, que estando el campo deshecho de gente se pida tanto dinero, yo, señor, soy muy mal contador; aquí tiene S.M. sus oficiales de la hacienda, y sé que cuando los enviaron a servir cerca de mí, fue pareciendo que no eran de los menos hábiles; todas las relaciones que van, son firmadas de su mano, y a la verdad téngolas yo por muy ciertas; pero como la mayor parte del dinero se pide para pagar deudas atrasadas y pagas de gente de presidios, y allá no hacen cuenta sino de lo presente, paréscelos el dinero mucho, y sería justo que desmenuzasen las cuentas y no las echasen a bulto" (58).

En octubre de 1570 la resistencia de los moriscos rebeldes se acercaba a su fin, mas todavía quedaban por resolver muchas dificultades de índole económica⁽⁵⁹⁾. Lejos de mostrar una actitud triunfalista por la victoria conseguida, Gutiérrez de Cuéllar insistía en que las campañas contra los moriscos habían constituido un foco de excesos y desfalcos, y que sin dilación se deberían acometer medidas de represión del gasto y abordar las tareas de intervención económica nuevamente surgidas tras la rendición:

"Ay neçesidad que luego se manden reformar todos los demás gastos que no fueren neçesarios y quitar las ocasiones que han tenido para robar muchos hombres de mala conciencia... Y así entiendo que han hecho más guerra a Su Majestad los suyos que los moros... En lo que toca a las haciendas de estos moriscos, las del Alpuxarra y sierras y costa neçessariamente se habrán de dar a los pobladores, con la carga de censos y tributos que paresciere que conuiene. En lo de los otros

lugares es menester que haya determinación sobre si han de ser confiscadas todas o parte dellas... ⁽⁶⁰⁾.

Tal y como informa Gutiérrez, junto a la toma de cuentas de las operaciones de financiación de la guerra se añadieron varias cuestiones nada asequibles: la reedificación y aprovisionamiento de las guarniciones militares que deberían mantener el orden y la vigilancia, el destino de los bienes confiscados a los moriscos tras su deportación, y la repoblación con gente foránea del territorio granadino abandonado. Con estas mismas prioridades, don Juan, deseoso de concluir su misión, expresaba claramente ante su rey y hermano que "solo queda el ejecutar lo ordenado, lo cual no puede hacerse sin dinero; y así suplico a V. M. que no haya dilación en proveerlo, porque demás de que será quitar mucha costa se evitarán hartos inconvenientes que no se pueden excusar. También suplico a V. M. mande proveer brevemente los ministros que son menester para lo de la hacienda, porque entretanto padesce mucho; y el recabdo que aquí se da no es el que basta, ni veo otro remedio que tan a propósito sea como dar dueño a todos estos negocios" ⁽⁶¹⁾. Todavía debería aguardarse mucho tiempo para que los deseos de don Juan se vieran satisfechos.

La administración de las propiedades de los moriscos deportados se convirtió en el principal problema después del primero de noviembre de 1570. En este mes, para controlar los bienes raíces y la "hacienda derramada" confiscada a los rebeldes huidos y vencidos -y algunos esclavizados a causa del conflicto- don Juan de Austria decidió que tres oidores de la Chancillería, Rodrigo Vázquez de Arce -que además entonces recibió título del Consejo Real- Montenegro y Pero López de Mesa, constituyeran una junta particular ⁽⁶²⁾. Pero fue una decisión transitoria y, a finales de diciembre, se constituyó el Consejo de Población, con competencias sobre todos los asuntos de justicia, hacienda y repoblación del territorio, en el que Felipe II sin dudarlo incluyó la presencia de Gutiérrez de Cuéllar ⁽⁶³⁾. Algunos meses después fueron oficialmente transferidos a la Corona, por cédula firmada el 24 de febrero de 1571, los bienes y las propiedades de los moriscos "de paces", que habían permanecido sumisos pero que igualmente fueron deportados ⁽⁶⁴⁾. El fruto se debía considerar bastante cuantioso, a juzgar por el interés que manifestaron los Fúcares en negociar un *asiento* -que no cuajó- que incluía la llegada de alemanes para poblar las tierras granadinas ⁽⁶⁵⁾. Para disponer los inventarios de las propiedades y preparar así la repoblación se dictaron nuevas instrucciones el 22 de marzo de 1571. Mientras que una parte de estas haciendas era vendida en pública subasta -bienes muebles sobre todo- y repartida en concepto de mercedes, comenzaron a efectuarse algunos arrendamientos, pero hasta la determinación de los procedimientos de ocupación de los lugares la actividad prioritaria de los oficiales dirigidos por Gutiérrez de Cuéllar consistió en dirigir la toma de posesión y el registro de los bienes raíces ⁽⁶⁶⁾. Finalmente, los *apeos* serían preferentemente empleados en la repoblación del territorio mediante la venta a censo perpetuo ⁽⁶⁷⁾.

Al mismo tiempo, con el objetivo de reducir los gastos se llevaba a cabo "la reformation de la gente del sueldo y oficiales que hay en este reyno" ⁽⁶⁸⁾. Pero estaba presente la prevención de no descuidar, con tal propósito, la reconstrucción y el aprovisionamiento de los presidios que debían garantizar la custodia de Granada ⁽⁶⁹⁾. Mientras tanto, Gutiérrez de Cuéllar también se preocupaba de la satisfacción de las deudas pen-

dientes. En este sentido, estimaba que, como desde la corte ya no se enviaría más dinero, a algunos de los acreedores podría pagarse permitiendo que mantuvieran los bienes que hubieran tomado en la guerra ⁽⁷⁰⁾. Pero esta cuestión no debía detener la revisión de los gastos, que efectuaba con la asistencia de Salablanca y de Tomás de Ayardi, contador de resultas que se había desplazado a Granada. El volumen del trabajo obligó posteriormente a Gutiérrez de Cuéllar a reclamar a la corte dos oficiales más, y fueron elegidos Antón Terradas y Miguel de Cabrera ⁽⁷¹⁾. La inspección de las cuentas, además, se enfrentaba con las reticencias de Salablanca y su oposición a las directivas de Gutiérrez de Cuéllar, que había encontrado en sus actividades serios indicios de connivencia en las operaciones de fraude ⁽⁷²⁾.

La intervención de Gutiérrez de Cuéllar en la fiscalización de la guerra de Granada y en las disposiciones se tomaron para reconstruir y reformar las guarniciones del reino y administrar los bienes incautados llegaría a su fin cuando terminaba el verano de 1571. Desde enero, confesaba estar harto y agotado y repetía que la mejor ayuda de costa que recibiría sería que se atendiera su petición de regresar a la corte ⁽⁷³⁾. Al fin, a mediados de agosto de 1571, cansado de tráfigos, aprietos y enemistades, consiguió licencia para exponer personalmente ante Felipe II y el cardenal Espinosa todas las vicisitudes que había sufrido desde diciembre de 1569 ⁽⁷⁴⁾. No por esto las preocupaciones originadas por la guerra de Granada terminaron para él pues, para supervisar el proceso repoblador impulsado desde el otoño de 1571, Felipe II creó en la corte la Junta de Población, en la que hubo de participar Gutiérrez de Cuéllar. Pero otros asuntos todavía más arduos y problemáticos le aguardaban en Madrid.

3.- GUTIÉRREZ DE CUÉLLAR Y LA CRISIS FINANCIERA DE 1573-77

Tras el fallecimiento del cardenal Espinosa, en septiembre de 1572, la corte se sumió en un cúmulo de luchas por el control de la gracia y de las instituciones. Además de los enfrentamientos entre los partidarios de Antonio Pérez y Mateo Vázquez de Leca, secretarios convertidos en las cabezas más visibles de las facciones cortesanas "papistas" y "castellanistas" que se habían formalizado desde 1573, el agravamiento gradual de la situación financiera, por otra parte, añadía un motivo más de tensión política y de preocupaciones para Felipe II. Con la intención de afrontar el *desempeño* del erario castellano, el rey tomó dos iniciativas: solicitar la participación de las Cortes, reunidas desde 1573, en los proyectos de saneamiento, y reunir a sus principales ministros en una junta, llamada la Junta de Presidentes, para que estudiaran y remediaran los problemas financieros ⁽⁷⁵⁾.

Habiéndose incorporado a sus tareas en la Contaduría mayor de Cuentas y en el Consejo de Hacienda, Francisco Gutiérrez de Cuéllar se implicó tanto en las pugnas cortesanas como en la discusión de las medidas hacendísticas. En el primer ámbito, se integró en las maniobras del secretario Mateo Vázquez por desplazar a los seguidores de Antonio Pérez y del "partido papista", mientras que, en el segundo, sería requerido primero para elaborar propuestas de reforma hacendística y, desde diciembre de 1575, para proceder a la toma de cuentas de los decretados.

3.1. Las reformas hacendísticas propuestas por Gutiérrez de Cuéllar

Tras hacerse pública la intención de Felipe II de mejorar la aplicación de los recursos y de introducir medidas que redujeran el déficit anual y el volumen de la deuda global y que permitieran efectuar las provisiones excusando la hegemonía de los *hombres de negocios* (especialmente de los genoveses), entre el otoño de 1573 y el verano de 1575 proliferaron las discusiones, memoriales y consultas sobre el tema. Entre la ingente cantidad de informes redactados destaca el que fuera firmado por Francisco Gutiérrez de Cuéllar posiblemente a finales de 1573, a instancias del presidente del Consejo de Castilla, Antonio de Covarrubias. En este memorial, dividido en tres partes, se encuentran explicaciones, referencias, sugerencias y noticias de interés particular, que en conjunto constituyen una exposición cabal de la situación hacendística de Castilla en tiempos de Felipe II y un anticipo de las órdenes que meses después serían practicadas⁽⁷⁶⁾.

a) En el primer y más superficial texto, "Para lo tocante a las rentas reales ordinarias de Castilla y a los oficiales de fronteras y otras partes que son ordinarios y resciben dyneros y otras cosas de V. Mag.", se proponían a Felipe II medidas de control administrativo y contable como forma imprescindible para mejorar los rendimientos (con preferencia de los arrendamientos sobre la administración directa), crecer las alcabalas, las remesas de Indias y los ingresos eclesiásticos, y evitar los fraudes en las provisiones de fronteras y galeras. Gutiérrez consideraba que para imprimir eficacia en la gestión hacendística eran fundamentales la buena elección de los oficiales y la rendición de cuentas con rapidez y, en particular, apreciaba los beneficios de las visitas, "y en esto va mucho así para que no haya robos y fraudes y otras cosas malas en la hacienda como para el buen recado que es menester que haya en sus oficios".

b) El análisis "Para que las neçesidades que ocurrieran se pueda V. Mag. proveer con menos daño que hasta aquí", conformaba todo un programa de disposiciones dedicadas a atajar las prácticas que habían perjudicado a la Hacienda real. En primer lugar, habría que sacar "particular relación y muy çierta del estado en que está la hacienda de V. Mag., ... y también sería necesario tener relación particular de todos los débitos que V. Mag. tiene". Tras obtener este conocimiento fiable de la situación financiera habría que adoptar varios tipos de decisiones: en primer lugar, unas concernían a los tratos con los banqueros, a los que no se deberían dar resguardos, adehalas ni otras facultades, y atañían a la propia actitud del rey, a quien convenía "procurar de proveer y buscar lo que fuere menester para que cuando llegue la neçesidad no estén los hombres de negocios tan señores de su voluntad en cuanto a los intereses", lo que podría hacerse llevando numerario a Flandes en zabras, de manera que se evitara en lo posible tomar *asientos*. En segundo lugar, era necesario detener la enajenación del patrimonio real que se derivaba de los arbitrios y expedientes fiscales y el frenar el daño económico que se sufría por la exportación de dinero que efectuaban los genoveses; además, señalaba que se imponía "guardar generalmente las leyes y premáticas que prohíben las usuras, intereses y cambios ilícitos". En tercer término, era preciso realizar diversas disposiciones de fomento y activación financiera, como captar el capital de los ahorradores castellanos (sobreentendiéndose, aunque no se mencione expresamente, la creación de erarios), regular las ferias, atraer a los hombres de negocios portugueses, y labrar en Castilla la moneda que corría en Nápoles, Sicilia y Milán.

c) La tercera prioridad consistía en “dar orden en pagar las deudas que V. Mag. tiene, de que corren intereses, y para desempeñar las rentas reales que están vendidas y empeñadas al quitar”. En este apartado, el más interesante y atrevido, estimaba Gutiérrez de Cuéllar que las deudas con los banqueros montaban unos 8 millones de ducados y, tras valorar los excesivos intereses, *juros de resguardo*, adehalas y facultades que habían gozado, consideraba oportuno cuantificar los beneficios que manejando estas prendas habían obtenido para descontárselo de sus consignaciones, de manera que se tuviera “por satisfecha y pagada la cantidad de dineros que dello sacaron para en cuenta de la deuda principal”; no obstante, añadía que, si esta resolución pareciera demasiado rigurosa y se quisieran respetar las condiciones de los *asientos*, se podría por lo menos ordenar la paralización del avance de los intereses corrientes por débitos y satisfacer estos parcialmente con los *juros* que mantuvieron en su poder. Es decir, que Francisco Gutiérrez anunciaba las medidas que serían puestas en práctica en el *decreto* y en el posterior *medio general*, mostrándose partidario de la primera y más radical porque permitiría liberar las consignaciones y arremetería contra la hegemonía de los extranjeros. En cuanto al desempeño de las rentas ordinarias que soportaban los *juros al quitar*, a continuación proponía varios procedimientos: como habían sido comprados a un valor real inferior a su valor nominal, podría reducirse éste a aquél (es decir, una forma original de *crecimiento*, de aminorar los intereses y la deuda consolidada). Pero poco podría apañarse sin involucrar al Reino en el pago de las deudas, para lo que cabría orientar a los diputados en los propósitos y darles libertad en los medios que dispusieran.

Esta tercera parte y, por tanto, el memorial terminaba con dos previsiones: si quedaran libres los ingresos extraordinarios (valoraba en 3.260.000 ducados la aportación de Subsidio y Cruzada, maestrazgos, servicios, salinas y flotas de Indias), el mejor remedio sería establecer su asignación rigurosa a unos gastos precisos (500.000 ducados para casas reales, 60.000 para consejos y quitaciones, 800.000 para galeras y 340.000 para guardas y fronteras) que montaban 1.700.000 ducados, de manera que todavía había margen para imprevistos (300.000) y quedaban 1.260.000 ds. para gastos extraordinarios. Y si no se consiguiera el desempeño, los otros recursos y efugios que habían sido propuestos permitirían aprontar aproximadamente 1.260.000 ducados, de manera que habiendo “quietud y sosiego” en Flandes y acotando el esfuerzo en Italia, podrían excusarse “los asientos y tratos de intereses que hasta aquí se han hecho y podrá Vuestra Majestad emprender cosas muy grandes”.

Consejos áulicos como los de Gutiérrez de Cuéllar hubieron de ser los que convencieron a Felipe II de la posibilidad de prescindir de los genoveses. Pero tanto esta aspiración como la consecución del desempeño no fueron sino quimeras que la realidad se encargó de poner en su sitio. Porque los genoveses fueron imprescindibles, el déficit jamás se conjugaba y las deudas podrían suspenderse y transformarse pero siempre permanecían y se engrosaban. Estas terribles conclusiones se impondrían tras la “banca rota” de 1575.

3.2. Las estrategias contables en la bancarrota de 1575

En septiembre de 1575, después de una larga etapa de maduración, Felipe II decidió

suspender el pago de las deudas que mantenía con sus *asentistas*. Meses después, en diciembre, dos cédulas reales simultáneas declaraban la anulación de las consignaciones, revocaban las condiciones de los *asientos* suscritos desde el 14 de diciembre de 1560, y establecían la formación y actividades de la comisión que debería efectuar la revisión contable según unas condiciones también enunciadas: a cada préstamo se permitía un interés máximo del 12 % anual, a correr desde su entrega hasta su restitución por la Corona, y frente al activo resultante, contra el asentista se cargaría un pasivo compuesto por las ganancias que hubiera obtenido por adehalas, mudanzas de *juros*, licencias de sacas, y por la manipulación de los *juros de resguardo* que el monarca les había cedido como aval (evaluándose cada *juro* según su calidad y situación), cuyo rendimiento sería tasado al 12 % anual. Si al confrontar ambos balances se comprobaba que el *asentista* era acreedor, recibiría la cantidad correspondiente con un interés del 12 %, y si fuera deudor debería devolver a la Hacienda real la suma comprobada pero sin réditos adicionales ⁽⁷⁷⁾.

Mientras se formulaban estas disposiciones, Felipe II había dudado la conveniencia de entregar a la Contaduría mayor de Cuentas tales cometidos o de crear una comisión *ad hoc*, como al final se hizo. La impresión que la Contaduría transmitía, un lustro después de las ordenanzas de 1569, no parecía demasiado alentadora. Juan de Ovando, presidente del Consejo de Indias, antes de convertirse también en presidente del Consejo de Hacienda, en enero de 1574, había observado que "El primer ministerio de la Contaduría de Cuentas es tomarlas; no se toman la décima parte, y cuando se toman es ya tiempo cuando no se puede poner cobro en los alcances y menos en las resultas" ⁽⁷⁸⁾. Según reconocía el propio Gutiérrez de Cuéllar, el organismo "tenía grandísima necesidad de reformatión" ⁽⁷⁹⁾. Al ser requerido "en lo que toca a las personas que me parece que podrían ser a propósito para las quantas que se an de tomar de los asientos", Gutiérrez de Cuéllar ofrecía una visión de su ajada situación institucional, de las carencias y las otras actividades de sus integrantes:

"Hay en la Contaduría mayor los cuatro del tribunal y diez y ocho oficiales que llaman contadores de resultas, y un fiscal por cuyas manos pasan los negocios y cuentas que allí se tratan. En la mesa principal del dicho tribunal no se pueden tomar [las cuentas del decreto] por las personas que al presente residen en él, porque los dos contadores mayores nunca por sus personas tomaron cuentas y los otros dos contadores, habiendo de asistir como asisten de ordinario al gobierno de las cosas de allí dentro y asistiendo también a la junta de los seys entramos, y el vno de más de esto al Consejo de Hacienda y al de Población y a otros negocios particulares que de estos consejos se le cometen, no podrían entender con la asistencia que conviene a estas cuentas, en las quales se ha de tener gran atención y viligancia y especulación. Sólo Pedro de Liévana, que es fiscal, podría entender en ello y lo sabrá bien hacer. De los diez y ocho contadores de resultas lo más son nuevos, y aunque ya saben tomar cuentas y entienden todos en los que ay, sólo los seys me parece que por la habilidad se podrían encargar de estas, que son Juan de Galarça y Gabriel de Santa Cruz, Tomás de Ayardi, Juan de Mercado, Andrés de Azcáratí, Juan Bernaldo; y de estos seys los dos están ausentes tomando cuentas, Ayardi en Granada y Azcáratí en Málaga, y de los otros cuatro los tres no tienen condición para ello y el uno entiende en las cuentas del pagador de las galeras, que son de mucha ymportancia, pero en caso que de estos se quisiesen tomar algu-

nos se podría mandar que viniese de Málaga Azcáratí, enviando allí otro en su lugar... y desembarcar a Juan Bernaldo de lo de las galeras poniendo en su lugar a Juan de Mercado... Fuera de la Contaduría ay Francisco Bravo, Luis de Peralta, Francisco de Salablanca, Cristóbal Guerra, escribano mayor de rentas, Juan Carrillo, contador de las Armadas que van a las Yndias y reside en Sevilla..."⁽⁸⁰⁾.

Ante este panorama no sorprende que Felipe II optara por formar una comisión, cuyos integrantes fueron comunicados confidencialmente, el 12 de diciembre, al secretario Mateo Vázquez:

"He pensado oy en lo de las personas para las cuentas... y las personas que me han parecido son: 1. Avalos, por ser del Consejo Real y dar más autoridad al negocio y ser de los de aquel Consejo el que más noticia tiene de esas cosas; 2. Francisco Gutiérrez de Cuéllar, porque bien es que entre en ello por su celo y entegridad y ser contador de cuentas, que es bien que entre el uno de ellas en éstas; 3. Francisco Bravo; 4. Salablanca; 5 Çubiçarreta, que tiene plática de quentas por las de Indias. El 6 sea o Juan Bernaldo o Mercado, uno de los dos que os parezca que aprueua más Francisco Gutiérrez ... o vos sepáis que sea más a propósito y más útil para ello"⁽⁸¹⁾.

La comisión de cuentas inició sus actividades a finales de año, tras esperar la presencia en la Corte del licenciado Avalos de Sotomayor, miembro del Consejo Real desde el 19 de julio de 1574, que había sido fiscal de la Contaduría mayor de Hacienda entre marzo de 1561 y julio de 1562, y oidor entre esta fecha y 1566, en que partió a Nápoles nombrado Gran Camerario y posteriormente consejero del Collateral⁽⁸²⁾. De esta manera, Avalos y Gutiérrez de Cuéllar se encargaron de dirigir las operaciones de la *junta de cuentas del decreto*, y fueron incorporados a la Junta de Presidentes para informar de su progreso y resultados⁽⁸³⁾. Pero además de ocuparse de estas cuestiones, Gutiérrez de Cuéllar debía participar en el Consejo de Hacienda y en la *junta de los seis*, encargada de controlar las consignaciones suspendidas, y formada por dos miembros del Consejo Real (Fuenmayor y Hernández de Liévana), los dos tenientes de la Contaduría mayor de Hacienda (Garnica y Hernando de Ochoa) y los dos de la Contaduría mayor de Cuentas.

En estos puestos, Gutiérrez mantuvo fuertes enfrentamientos con Francisco de Garnica. Al criticar la falta de límites claros entre las competencias del Consejo de Hacienda y la *junta de los seis*, reivindicaba que la medida más oportuna sería fundir ambos en una única entidad con un presidente de confianza, añadía que la confusión únicamente respondía al interés de Garnica por manejar a su antojo los negocios y por beneficiar a sus amistades, y denunciaba las graves irregularidades perpetradas en este sentido (desorden en la emisión de cédulas de pago y en el recaudo de caudales, ausencia de secreto en la resolución de los negocios, encubierto trato de favor al Marqués de Auñón y a Lorenzo Spinola, etc.). Como protesta ante estas turbias maniobras, Gutiérrez de Cuéllar con frecuencia se negaba a rubricar los documentos y despachos que le presentaban⁽⁸⁴⁾. La reacción de Garnica consistió en difundir que Gutiérrez se había lucrado en la administración de los bienes incautados a los moriscos granadinos. Meses después, en abril de 1576 falleció Hernando de Ochoa, su compañero en la Contaduría mayor de Hacienda. Para cubrir la vacante se ofreció Gutiérrez de Cuéllar, que llevaba tiempo manifestando su deseo de traspasar la tenencia de la Contaduría mayor de Cuen-

tas a Francisco Bravo ⁽⁸⁵⁾, pero Garnica impidió la designación manifestando una oposición frontal hacia él ⁽⁸⁶⁾.

La comisión de cuentas emprendió sin dilaciones las tareas encomendadas en la cédula del *decreto*. Con esta finalidad, reclamó a Garnica y al secretario Delgado los *libros de la razón*, donde estaban registradas 287 operaciones crediticias que se habían realizado desde noviembre de 1560 ⁽⁸⁷⁾. Según un balance posteriormente elaborado constaban, hasta el momento de la suspensión, un total de 296 operaciones con 66 *hombres de negocios*, de los que un tercio todavía tenían asientos sin expirar, bien en concepto de libranzas por cobrar o bien por no haber entregado a la Corona las cantidades comprometidas ⁽⁸⁸⁾. Para proceder con más comodidad y certeza en esta evaluación, la comisión solicitó a los banqueros que colaboraran en la toma de cuentas pero, como cabía suponer, estos se negaron reiteradamente a pesar de que los plazos les fueron sucesivamente ampliados. Para obligarles a aportar la documentación y datos que les reclamaban, la comisión rechazó que los memoriales que elevaban a Felipe II exponiendo la desmesura e injusticia del *decreto* fueran siquiera recibidos ⁽⁸⁹⁾. Pero la resistencia de los *hombres de negocios* a presentarse ante la comisión era una parte de su estrategia para doblegar a Felipe II, pues sabían que sin su participación, jurídicamente las cuentas serían reprobables, y mientras la revisión no estuviera terminada seguían corriendo los intereses que el *decreto* estipulaba que se abonaría a todos los que resultaren acreedores ante el Erario (12 %).

La insistencia de la comisión para que los *asentistas* acudieran y participaran en las diligencias no era mera obstinación, ya que tenían profundas dudas para determinar los beneficios espurios que habían obtenido en los *cambios*, *juros de resguardo* y demás facultades que habían disfrutado ⁽⁹⁰⁾. Las vacilaciones surgieron nada más examinarse el primer *asiento* firmado tras noviembre de 1560: concertado con un consorcio de banqueros en enero de 1561, la devolución de 1.000.000 de ducados y sus intereses había sido consignada sobre los servicios de las Cortes, con la garantía de *juros de resguardo* (algunos a 10.000 el millar) colocados sobre el incremento de las alcabalas de 1562, que así había quedado pignorado en su tercera parte ⁽⁹¹⁾.

Esta dificultad contable se complicaba con la ambigüedad del contenido del *decreto* respecto a los procedimientos de toma de cuentas. Para el presidente de la comisión, Avalos de Sotomayor, el *rescuento*, donde se confrontaban la cantidad anticipada y la reembolsada en cada trato, tomando el 12 % como límite del beneficio, debería efectuarse con todo rigor haciendo "vía de refectión", es decir, poniendo en contra del *asentista* los intereses de las ganancias que hubiera obtenido injustamente, de manera proporcional al tiempo que las hubiera gozado ⁽⁹²⁾. Pero inicialmente la Junta de Presidentes desestimó esta opción, entendiendo que el *decreto* no comprendía esta severa operación contable ⁽⁹³⁾. Para variar esta decisión Avalos se dirigió a Felipe II, e informó de los tres posibles criterios de la comisión de la toma de cuentas: el primer camino, decía, consistía en

"que esto que los mercaderes deben de estas usuras valga a V. Mt. para sólo contraponerse a lo que V. Mt. les debe y compensallo con ello y que dende el día que lo començaron a gozar no les corra interesse por la rata de ello; el 2º, que no solo sirva para este efecto sino que también sobre esto que es producir interesse de

doce por çiento hasta igualar con el interesse que el mercader llaba a V. Mt. al mismo respecto; el 3º, que el interesse de la deubda que a V. Mt. se debe por proceder de usura y delicto demás de llegar asta yqualar los intereses de ambas partes podrá passar hasta el último asiento de cada un mercader" (94).

Considerando que esta tercera vía era la más provechosa para el Erario real, por consiguiente sugería que debía rectificarse la determinación tomada a finales de enero por la Junta de Presidentes. A primeros de febrero, la insistencia de Gutiérrez de Cuéllar conseguía finalmente convencer a la Junta de la conveniencia de utilizar en contra de los banqueros los intereses de los beneficios que hubieran obtenido con los *juros de resguardo* y las otras *comodidades* (95). Esta postura tenía la virtud de amenazar a los acreedores con contundencia, pero comprendían quienes la inspiraban que su realización también conllevaba, además de dificultades contables, perjuicios insoslayables. Su principal inspirador, Avalos de Sotomayor, ante Felipe II encomiaba que el *decreto* supondría "Desarraigar los logros que con tanta publicidad corrían...; librar y reducir la hacienda de V. Mt. de tan grande deubda como sobre sí tenían...; resucitar el tracto y comercio de la entrada y salida de las mercaderías, que con la mayor ganancia de la usura estaba muerto...; lo mucho que obraría en materias y consideraciones de Estado, la opinión de riqueza y ver a V. Mt. libre de cambios", pero asimismo se percataba de que su aplicación literal cortaría los nervios de la maquinaria militar de la Monarquía (96).

No sorprende, por tanto, que desde la primavera de 1576 la toma de cuentas continuara al mismo tiempo que Felipe II decidía emprender negociaciones con los *hombres de negocios*. Ambas partes sabían que los cálculos y las reclamaciones posteriores podrían prolongarse meses y meses, con estragos para todos. Mientras que los banqueros carecían de numerario para realizar sus actividades y negocios y para afrontar sus propias deudas, las dilaciones en determinar quiénes y en cuánto eran acreedores y deudores perjudicaban a la Hacienda real puesto que avanzaban los intereses del 12% establecidos en el decreto en favor de los primeros. De esta manera, para la Hacienda real, tanto o más importante que cerrar las cuentas, debía ser preparar y declarar la forma en que los acreedores que fueren verificados deberían cobrar sus alcances, para así parar el corrimiento de intereses en su favor (97). En junio, Garnica y Avalos de Sotomayor se encargaron de diseñar las fórmulas y procedimientos de satisfacer a los acreedores que la revisión de cuentas más adelante declarare (98). La orden, promulgada el 15 de julio, estableció que quienes resultaren acreedores tras la revisión de sus tratos con la Hacienda real, fueran pagados con los *juros de resguardo* que estuvieran en su poder, tasados a 20.000 al millar, y el resto, la mitad con juros situados en el estanco de la sal, también de a 20.000 el millar, y la otra mitad con vasallos y jurisdicciones (99).

Pero, por entonces, se dudaba que la verdadera finalidad del *decreto* fuera comprobar y rectificar las ganancias de los *asentistas*. Si en el otoño de 1575 Felipe II había pensado que podría prescindir de los genoveses, no tardó en retractarse y considerar que la relación que les vinculaba debía restablecerse indefectiblemente. En este sentido, la realización de los tanteos hubo de ser el mecanismo más útil para atemorizar a los *hombres de negocios* y defender las aspiraciones del rey en las negociaciones que reajustaran sus relaciones. De momento, el *decreto* había puesto el dedo en la llaga de las copiosas ganancias que habían obtenido en sus tratos con la Hacienda real, y, comple-

mentado con la orden de julio de 1576, obligaría a los acreedores a aceptar como medio de pago los *juros de resguardo* que todavía tenían en su poder. Conscientes de este significado, Gutiérrez de Cuéllar y Avalos se dedicaron a ir "considerando y tanteando cómo se reduzca la ejecución del decreto a aquello que se puede arbitrar por suma bastante para que se recobren los daños y excesos que contra justicia an causado los asientos y negocios pasados" e, incluso, advertían que habían tenido que moderar ciertas condiciones impuestas en el decreto: "y no hemos seguido el rigor de la resulta de los tanteos porque visto lo mucho a que sale, se va descubriendo que no pensaron los que hicieron el decreto que haúa de llegar a tanto, porque a creello es cosa verosímil que moderaran algunas reglas de él..." ⁽¹⁰⁰⁾. De esta manera, se consideraba que, si eran respetadas las condiciones establecidas en cada *asiento* pero se entregaban los *juros de resguardo* como forma de satisfacer parte de los débitos, el monarca todavía adeudaría a los banqueros algo más de 5.000.000 de ducados. No obstante, según la interpretación contable dada al *decreto*, tras el *reescuento* y una vez descontados los *resguardos*, el Erario sólo resultaría alcanzado en unos 3.000.000 ds. Así, por ejemplo, en el caso de Juan Fernández de Espinosa y de Lorenzo Spinola, "por los assientos alcançan los dos a V. Mt. en más de dos millones y medio y por el decreto si rehusaren el concierto son alcançados en más de quinientos mil ducados" ⁽¹⁰¹⁾. Según otras estimaciones elaboradas por Gutiérrez de Cuéllar en agosto de 1576, los débitos totales con los banqueros alcanzarían los 17.000.000 de ducados. Tras deducir los *resguardos* la cantidad todavía superaría los 9.000.000, y aplicando además las medidas del decreto se reducirían a unos 6.000.000 ⁽¹⁰²⁾. Pero ya había señalado Garnica que, si bien el *decreto* podría generar unos 4.000.000 de escudos en favor del Erario, sin duda acarrearía la quiebra de los *hombres de negocios* y el estrago del comercio castellano ⁽¹⁰³⁾.

Unas semanas después de la publicación de la cédula de julio de 1576 se retomaron las negociaciones con los banqueros. Estos habían constituido una *diputación*, integrada por Hernán López del Campo, Agustín Spinola, Esteban Grillo y Ambrosio di Negro, mientras que Felipe II decidió, en agosto de 1576, que Avalos de Sotomayor, Garnica y Francisco Gutiérrez, formaran la *junta de los tres*, una comisión la Junta de Presidentes que se encargó durante los meses siguientes de recoger y analizar las ofertas de los decretados ⁽¹⁰⁴⁾. En este momento Felipe II se encontraba ante una apretada tesitura: se imponía asumir el desgaste que para su preeminencia suponía dar marcha atrás en la aplicación del *decreto* y de la cédula de julio de 1576 y concertar el *medio* y transigir con los banqueros, ya que ésta era la única manera para recuperar su autoridad militar en los Países Bajos, cada vez más erosionada (motines en Aals y en Amberes, y posterior tregua entre los Estados Generales y los rebeldes mediante la Pacificación de Gante).

El dilema y las dudas que inquietaban a Felipe II se trasladaron a la actuación de la Junta de Presidentes. En agosto, había considerado que "visto que de la ejecución de ellas [las cédulas del decreto] resultan tanto inconvenientes como se entiende, assy para lo del trato y comercio como para las otras cosas, parece que si huuyese forma de tomarse algún medio conveniente para todo se debe ver" ⁽¹⁰⁵⁾. Por entonces, Felipe II había descartado confidencialmente la revocación de las condiciones de los *asientos* y se mostraba decidido a firmar el *medio general* ⁽¹⁰⁶⁾. Pero la Junta de Presidentes no

demostró unanimidad: en la votación que celebró a mediados de diciembre, mientras que Garnica y Gutiérrez de Cuéllar entendieron que la prioridad era la remisión de caudales a Flandes y que para conseguirla era inexcusable el concierto con los *asentistas*, Avalos opinaba "que en ninguna manera se deue tomar medio"; Hernández de Liévana, "que el decreto se cumpla y se hagan las cuentas conforme a él"; Fuenmayor, "que no se tome medio general"; Antonio de Padilla, que "ha deseado el medio general, mas que no se atreue a venir en que se haga con tan gran pérdida de la hacienda de su Md"; y Covarrubias, que "ha sido de parecer que hubiese medio general mas que hauiendo visto lo mucho que se pierde por el medio que está apuntado respecto de lo resultado de los tanteos, no se atreue agora a ser del parecer primero..., y que lo es agora de que se tome medio con las personas que alcanzan a Su Mag. ... y que con los alcançados por su Mag. se execute el decreto...; y que en caso que no se pueda venir a esto se prosiga la execución del decreto" ⁽¹⁰⁷⁾.

Pocos días antes de que esta votación se celebrara, la comisión había terminado las cuentas estipuladas en diciembre de 1575 ⁽¹⁰⁸⁾. A finales de este mes, se remitieron a los interesados y, según Gutiérrez de Cuéllar, "como ellos esperaban resolución del concierto an desmayado mucho y puéstose todos mustios" ⁽¹⁰⁹⁾. Tras esta impresión y su sorpresa inicial no tardaron los *asentistas* en reaccionar, y presentaron un aluvión de críticas contra los procedimientos seguidos en la elaboración de las cuentas, y con demostración de los *yerros* y agravios de unos cómputos que, según señalaban, ni siquiera se habían atendido a las disposiciones de la cédula del *decreto* ⁽¹¹⁰⁾. La certeza que fundamentaba estas quejas debía ser tan notoria que, para Garnica, "los tanteos que se han hecho y tomado por regla y guía de este negocio están muy herrados en notable suma y cantidad por hauerse hecho sin partes ...; siendo esto así, ¿cómo se puede yr seguro al juicio del medio por la cuenta de los tanteos?" ⁽¹¹¹⁾.

Por consiguiente, la arbitrariedad de la revisión de cuentas en lugar de avalar la situación del monarca la impregnaba de inseguridad. A primeros de febrero de 1577, Gutiérrez de Cuéllar advertía con desazón que la Junta de Presidentes titubeaba al "ver y determinar las dudas que se han ofreçido y de nuevo se ofreçen sobre la ynteligencia del decreto", y que aceptar cualquier petición de los implicados supondría "harta revolución para las quantas" ⁽¹¹²⁾. Unos días después, la Junta decidió invalidar el principal procedimiento seguido en el *rescuento*, es decir, haber cargado intereses contra los decretados proporcionalmente al tiempo que habían dispuesto de los *juros de resguardo* ⁽¹¹³⁾. Tal y como Gutiérrez de Cuéllar había temido, los resultados de los tanteos quedaban anulados, y el duro trabajo de la comisión durante un año se había esfumado. Pero ya Gutiérrez, en la votación de diciembre, había asumido la necesidad del *medio general*, comprendiendo que la revisión de cuentas no había tenido como objetivo liquidar a los *hombres de negocios* sino presionarles para que aceptaran la reconversión de su deuda y el reajuste de sus relaciones con la Hacienda real castellana.

Al fin, el 27 de marzo de 1577 Felipe II rubricó el *medio general* que anulaba las cédulas anteriores y establecía los procedimientos para saldar los débitos con los *hombres de negocios*, evaluados en unos 15 millones de ducados. Tras descontar más de diez millones en concepto de *juros de resguardo* en posesión de los decretados, intereses no reconocidos y otros títulos depreciados sobre la Casa de Contratación y que

hubieran debido consumir y no lo habían hecho, quedaban pendientes de devolución 4.805.808 ducados: serían satisfechos, en su tercera parte, con vasallos de la iglesia y jurisdicciones (tasados respectivamente a 16.000 y 42.500 mrs. el millar), y las otras dos terceras partes restante con *juros al quitar* situados en las salinas, valorados a 30.000 el millar y a gozar desde el 1 de enero de 1577; finalmente, entre otras disposiciones adicionales, se obligaba a los *asentistas* a prestar mancomunadamente a la Monarquía un anticipo de 5.000.000 ducados ⁽¹¹⁴⁾.

El carácter unilateral de este *medio general*, promulgado tras negociar con los acreedores pero sin que éstos dieran su asentimiento formal, motivó su rechazo e hizo prolongar las negociaciones entre ambas partes hasta diciembre. La principal petición de los *hombres de negocios* se refería a los intereses de la deuda, pues deseaban que se contabilizaran hasta diciembre de 1575 (cuando efectivamente se conoció el *decreto*, aunque oficialmente se fechara en septiembre al suspenderse las consignaciones), y al valor y seguridad de los medios de pago. Para estudiar las propuestas de los interesados Felipe II creó la *junta del medio general*, integrada por quienes también acudían a la Junta de Presidentes, los oidores de la Contaduría mayor de Hacienda y el tesorero general Fernández de Espinosa. En su seno, se formó una comisión que reunía a Antonio de Padilla (presidente del Consejo de Ordenes y consejero de Hacienda), Garnica, Gutiérrez de Cuéllar y Fernández de Espinosa.

Las dudas que, durante el verano, manifestó Felipe II sobre el camino a seguir, estaban sin duda relacionadas con los enfrentamientos que mantenían sus principales consejeros sobre la materia. Fernández de Espinosa, también implicado en su condición de *asentista* acreedor ⁽¹¹⁵⁾, y Gutiérrez de Cuéllar, no dejaban escapar ocasión para erosionar el protagonismo de Garnica. Este se había consolidado como el ministro más influyente de Felipe II en cuestiones hacendísticas, y la estrategia de Gutiérrez para desprestigiarle consistió en denunciar sus iniciativas, sus vínculos con los *hombres de negocios* y sus irregularidades en la tramitación de la documentación ⁽¹¹⁶⁾. Pero la influencia de Garnica sobre las decisiones de Felipe II todavía era muy sólida, y su criterio fue determinante en el contenido del *medio general* que se rubricó el 5 de diciembre de 1577, del que todavía quedaban excluidos, por decisión de Felipe II, los Fugger, Fernández de Espinosa y los *hombres de negocios* establecidos en Amberes ⁽¹¹⁷⁾. En definitiva, al documento del 27 de marzo se añadió que los implicados pudieran vender y enajenar los medios de pago que recibieran -y emplearlos para saldar sus propios débitos- o que, siendo vasallos, éstos pudieran rescatarse, y fueron especificadas otras reglas para proceder a la liquidación de las deudas -como saldar con la mayor brevedad, elaborando cálculos aproximados, el 90% de cada débito, y luego ya componer los finiquitos definitivos, quedando precisamente ese 10% retenido por la Corona por si hubiere error-. Pero la mayor parte del contenido del *medio* se refería al *socorro* de 5.000.000 de ducados (1.875 cuentos) que los asentistas deberían allegar en sociedad. Tal suma debería ser aportadas sucesivamente en los tiempos y lugares que indicara Felipe II, hasta marzo de 1583, en escudos de oro. Su posterior devolución, en Castilla, añadiría 25 mrs. a cada escudo prestado en Italia (se reconocía un interés, pues, del 6,25%), y 30 mrs. si lo fuera en Besançon (7,5%). Los *hombres de negocios*, en virtud del *medio general*, habían sido transitoriamente convertidos en factores de la Hacienda real castellana.

4.- EPÍLOGO

A comienzos de 1578, Antonio de Padilla, aunque apreciaba la mejora de la situación financiera, sugería realizar diversas reformas de "la orden y composición del ministerio de la Hacienda" ⁽¹¹⁸⁾. Desde entonces, Felipe II tomó diversas decisiones -el comienzo de una *visita*, la elección de Hernando de Vega para la presidencia del Consejo de Hacienda, y la reforma de los *libros de la razón*- que formaron parte de un proceso de definición jurisdiccional que coincidió con el declive del "partido papista" y del protagonismo de Francisco de Garnica. Por su parte, Gutiérrez de Cuéllar vio satisfecho su deseo de abandonar las ingratas labores contables, pues en agosto de 1579 fue nombrado, tal y como era su aspiración desde años antes, teniente de la Contaduría mayor de Hacienda ⁽¹¹⁹⁾. Como le cabía esperar, el recibimiento que su nuevo compañero y viejo conocido, Garnica, le ofreció, fue pésimo ⁽¹²⁰⁾. Pero Gutiérrez ejerció poco tiempo en su flamante oficio ya que, en mayo de 1580, pidió ausentarse de sus diversas obligaciones y cargos en la administración y, habiendo obtenido una licencia por dos meses para acudir a su Segovia natal, parece que falleció allí ⁽¹²¹⁾.

Su trayectoria en la corte al servicio del cardenal Espinosa y en posterior sintonía con Mateo Vázquez, y su participación en misiones tan cruciales como la fiscalización de la guerra de Granada y la toma de cuentas del decreto de 1575, nos ha permitido conocer las actividades y evolución de la Contaduría mayor de Cuentas, y observar que su cometido fundamental, vigilar que nadie cometiera peculado, estaba condicionado por otros intereses. La distancia entre las referencias legales y la realidad de los medios de control contable, la dinámica de las pugnas cortesanas y la importancia de las actitudes personales, suponían influencias y constreñimientos que la actuación contable, como instrumento de la política financiera de Felipe II, no podía soslayar o que, más bien, constituían sus características principales.

ABREVIATURAS

- AGS: Archivo General de Simancas.
CC: Cámara de Castilla.
CG: Contadurías Generales.
CMC: Contaduría Mayor de Cuentas.
E: Estado.
QC: Quitaciones de Corte.
- AHDE: *Anuario de Historia del Derecho Español*.
AVDV: Archivo Viejo de los Duques de Villahermosa.
AZ: Archivo Zabálburu
BPUG: Biblioteca Pública y Universitaria de Ginebra.
CEF: Colección Edouard Favre
- CODOIN: *Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España*.
IVDJ: Instituto Valencia de Don Juan
NR: *Nueva Recopilación de las leyes de estos reinos* (ed. facsímil)

NOTAS

- ⁽¹⁾ Para todas estas operaciones, C. J. DE CARLOS MORALES, *El Consejo de Hacienda de Castilla (1523-1602). Patronazgo y clientelismo en el gobierno de las finanzas reales durante el siglo XVI*, Valladolid 1996, pp. 72-91.
- ⁽²⁾ NR, Libro nono, título V, leyes XII-XXXIII. Cf. T. GARCIA-CUENCA ARIATI, "El Consejo de Hacienda (1476-1803)", *La economía española al final del Antiguo Régimen*. IV. Instituciones, Madrid 1982, pp. 426-428.
- ⁽³⁾ Véase un repaso bibliográfico y una excelente investigación sobre su situación hasta comienzos del reinado de Carlos I, en E. HERNANDEZ ESTEVE, "La Contaduría mayor de Cuentas de Castilla en tiempo de los Reyes Católicos (1474-1516)", trabajo presentado en el simposio *The Economic Functions of Supreme Auditing Institutions*, octubre de 1989 (policopiado), que nos excusa de mencionar los orígenes medievales y los trabajos previos sobre el tema (debidos a Espejo, Gibert, Pérez-Bustamante, etc). Gracias a la Nueva Recopilación y al trabajo de F. GALLARDO FERNÁNDEZ, *Origen, progresos y estado de las rentas de la Corona de España, su gobierno y administración*, Madrid 1805, tomo I, conocemos las disposiciones y ordenamientos que han permitido exponer la apariencia institucional de la Contaduría mayor de Cuentas, pero apenas nada de los conflictos y realidades que marcaron su evolución y funcionamiento.
- ⁽⁴⁾ NR, Libro nono, título V, leyes IX, X y XI.
- ⁽⁵⁾ R. CARANDE, *Carlos V y sus banqueros*. II. *La hacienda real de Castilla*, Barcelona 1987 (reed.), pp. 75 y 186 (con algunos errores en esta última).
- ⁽⁶⁾ AGS, QC, leg. 37, fols. 332-336. Para la carrera del primer conde de Olivares, al servicio de Carlos V y de Felipe II, J. H. ELLIOTT, *El Conde-Duque de Olivares*, Barcelona 1990, pp. 28-29. Hijo del duque de Medina Sidonia y de su segunda esposa, Leonor de Zúñiga, el fracaso de sus pretensiones de heredar los principales estados de su padre le compelió a labrarse carrera en el servicio a Carlos V, como les sucediera a tantos otros *segundones* andaluces. Habiendo colaborado en el aplastamiento de las *comunidades*, se incluyó en la casa del emperador como mayordomo, oficio que le permitió acompañarle por Alemania, Italia y Flandes. En recompensa a su dedicación, Carlos V le dotó con el título de conde de Olivares en 1535, y disfrutó diversas dignidades en la orden de Calatrava y el cargo de alcaide perpetuo de los alcázares y atarazanas de Sevilla.
- ⁽⁷⁾ AGS, QC, leg. 37, fols. 1188-1189. Los títulos de Olivares y de Niño fueron los primeros que se dictaron para este cargo, por que hasta entonces, como se indica en este último, "no se haúa de costumbre de asentarse los títulos de Contadores de Cuentas".
- ⁽⁸⁾ NR, libro nono, título V, ley XIII.
- ⁽⁹⁾ Veterano oficial otrora *cliente* de Francisco de los Cobos, pagador de las Guardas entre 1544 y 1557, teniente de la Contaduría mayor de Hacienda y consejero de Hacienda entre 1554 y 1557, factor en la Casa de Contratación entre 1557 y 1560, y desde este año teniente de la Contaduría mayor de Cuentas (AGS, QC, leg. 8; BL, ms. Add. 28.339, fols. 48-49, memorial sobre sus servicios, 23 de marzo de 1574).
- ⁽¹⁰⁾ Su expediente, en AGS, QC, leg. 28, fols. 77-82, recoge que desde agosto de 1536 se había encargado de las declaratorias de juros, libros y escrituras de la Corona, y que se ocupaba en la Contaduría mayor de Cuentas desde el 5 de julio de 1555.
- ⁽¹¹⁾ Algunos datos sobre sus bienes y disposiciones testamentarias, M. GRAU, "D. Francisco Gutiérrez de Cuéllar y sus obras pías", *Estudios Segovianos*, III (1951), pp. 5-14. Las prime-

ras noticias que tenemos de sus servicios a la Corona datan de octubre de 1558, como administrador de la encomienda de Castrotañaf (cf. L. SALAZAR DE CASTRO, *Los comendadores de la Orden de Santiago*, 2 vols., Madrid 1949, p. 480).

⁽¹²⁾ AGS, E, leg. 131, n° 27.

⁽¹³⁾ *Ibidem*, n° 33.

⁽¹⁴⁾ *Ibidem*, n° 34.

⁽¹⁵⁾ *Ibidem*, n° 31.

⁽¹⁶⁾ AGS, E, leg. 131, n° 35 y leg. 144, n° 76.

⁽¹⁷⁾ AGS, CC, libro de cédulas 139, fols. 204v-205r, prórroga por otros tres años de sus funciones, el 9 de abril de 1565 (minuta en IVDJ, envío 22-D, n° 7).

⁽¹⁸⁾ Citados en *NR*, IX, V, ley 36, cap. 3.

⁽¹⁹⁾ AGS, E, leg. 144, n° 74, exposición de las actitudes de los capitanes generales ante la toma de cuentas, de los gastos de Francisco de Lixalde en Inglaterra por orden del secretario Eraso y el conde de Feria, y de los alcances de Cruzada (cuentas que se tomaban en presencia de los contadores de la Comisaría general).

⁽²⁰⁾ AGS, E, leg. 144, n° 75, 8 de febrero de 1565, respuesta a la consulta de la Contaduría mayor de Cuentas que se envió a Monzón.

⁽²¹⁾ IVDJ, envío 31 (caja 43), sin foliar, minuta donde se añadía: "y otrosí le cometemos y mandamos que haga la misma diligencia en visitar y visite la nuestra Contaduría mayor de Cuentas y los contadores mayores de cuentas y menores y otros qualesquier oficiales dellas..."

⁽²²⁾ AGS, E, leg. 146, n° 200, Juan de Isunza a Felipe II.

⁽²³⁾ AGS, E, leg. 146, n° 201.

⁽²⁴⁾ AGS, CC, libro de cédulas 128, fols. 197v-198r, orden de Felipe II al licenciado Jaraba, 8 de julio de 1565, que desde la muerte de Figueroa se ocupaba de la visita.

⁽²⁵⁾ AGS, QC, leg. 27, fols. 421-431.

⁽²⁶⁾ J. MARTÍNEZ MILLÁN, "En busca de la ortodoxia: el Inquisidor general Diego de Espinosa", *La corte de Felipe II*, Madrid 1994, pp. 196-200.

⁽²⁷⁾ AGS, CC, lib. de cédulas 128, fols. 197v-198r.

⁽²⁸⁾ C. J. De CARLOS MORALES, "El poder de los secretarios reales: Francisco de Eraso", en *La corte de Felipe II*, pp. 140-145.

⁽²⁹⁾ CARLOS MORALES, *El Consejo de Hacienda...*, pp. 102-112.

⁽³⁰⁾ *NR*, Libro nono, Título II, Ley I. Sobre su contenido véanse las exposiciones de R. GIBERT Y SANCHEZ DE LA VEGA, "Contadores de Hacienda e intervención fiscal en el Antiguo Régimen castellano", *Itinerario histórico de la Intervención General del Estado*, Madrid 1976, pp. 124-128; y GARCIA-CUENCA ARIATI, pp. 429-432.

⁽³¹⁾ AZ, carp. 148, n° 107, carta a Felipe II, anotada por éste al margen: "Desto será bien que se trate en la visita, que cierto conviene proueerse como decfs..."

⁽³²⁾ AGS, CC, libro de cédulas 133, fol. 580, y lib. de céd. 140, fol. 156. Entre tanto, su oficio de teniente estuvo desempeñado por Martín de Ramoyn, que fue facultado para terminar los negocios y cuentas de la Contaduría mayor que tuviera irresueltos (*ibidem*, fols. 145v-146r).

⁽³³⁾ J. L. GONZALEZ NOVALIN, "El Cardenal Espinosa (+1572). Proceso informativo para su consagración episcopal", *Anthologica Annua*, 15 (1967), pp. 465-482.

⁽³⁴⁾ IVDJ, envío 24, n° 12.

- ⁽³⁵⁾ IVDJ, envío 22-D, fajo 7, "Los oficiales de resultas y de libros que hay en la Contaduría mayor de Cuentas, y los salarios que allí llevan y los aprovechamientos que se entiende que algunos dellos tienen en otras partes son los siguientes", y fajo 9, "Los salarios que se dan en la Contaduría mayor de Cuentas son los siguientes", ambos hológrafos de Gutiérrez de Cuéllar.
- ⁽³⁶⁾ *Ibidem*, fajo 8, "Lo que últimamente se ha dado por memoria al Illmo. sr. Cardenal sobre lo que toca a la Contaduría de Cuentas es lo siguiente", fajo 9 y fajo 17, carta de Espinosa a Felipe II con anotaciones marginales de éste.
- ⁽³⁷⁾ *Ibidem*, fajo 17, "Demás de las ordenanças que en borrador...", de Espinosa a Felipe II.
- ⁽³⁸⁾ *NR*, libro nono, título V, leyes 36-40. Una breve exposición de su contenido, GARCIA-CUENCA ARIATI, pp. 432-433.
- ⁽³⁹⁾ IVDJ, envío 22-D, fajos 4-8, 11, 12, 16 y 28.
- ⁽⁴⁰⁾ Para sus orígenes y desarrollo, véanse dos estudios clásicos: J. CARO BAROJA, *Los moriscos del reino de Granada*, Madrid 1985 (3ª ed.), pp. 175-201; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ y V. VINCENT, *Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría marginada*, Madrid 1985 (reed.), pp. 35-56.
- ⁽⁴¹⁾ F. BRAUDEL, *El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II*, 2 vols., Madrid 1981, II, pp. 545-554, 556-562, ofrece una excelente síntesis y se ocupa de la trascendencia de esta cuestión.
- ⁽⁴²⁾ D. HURTADO DE MENDOZA, *Guerra de Granada* (ed. de B. BLANCO-GONZÁLEZ), Madrid 1970, p. 223: "Lo primero en que se ocupó [don Juan] fue en reformar los excesos de capitanes y soldados en alojamientos, contribuciones, aprovechamientos de pagas; estrechando la costa, aunque no atajando las causas del desorden". Varios ejemplos de abusos, CARO BAROJA, pp. 193-194.
- ⁽⁴³⁾ E. MARTÍN ACOSTA, *El dinero americano y la política del imperio*, Madrid 1992, p. 144.
- ⁽⁴⁴⁾ Cf. HURTADO DE MENDOZA, p. 231; Luis de MÁRMOL CARVAJAL, *Rebelión y castigo de los moriscos*, Málaga 1991 (reed.), p. 165.
- ⁽⁴⁵⁾ IVDJ, envío 50, fols. 145-150, memorial elaborado por Francisco de Garnica.
- ⁽⁴⁶⁾ S. FERNÁNDEZ CONTI, *Los Consejos de Estado y Guerra en tiempos de Felipe II*, Valladolid 1998, pp. 110-111; MÁRMOL CARVAJAL, pp. 165-166.
- ⁽⁴⁷⁾ Véase HURTADO DE MENDOZA, p. 279.
- ⁽⁴⁸⁾ IVDJ, envío 62 (caja 83), nº 454, fechada el 21 de octubre. El 24 del mismo mes se expresaba en términos semejantes e intentaba atribuirse la idea de la misión, nº 455: "escríui a Vª Sª Illma. la necesidad que aquí hay de persona de mucha confiança por cuya mano se provea lo tocante a las vituallas y municiones, y que habiendo de venir aquí a esto y otras cosas, Francisco Gutiérrez de Cuéllar, como acá se ha dicho, será de mucha importancia la brevedad...".
- ⁽⁴⁹⁾ IVDJ, envío 62 (caja 83), nº 458, fechada el 25 de diciembre (erróneamente de 1570, tratándose de 1569), a los nueve días de su llegada.
- ⁽⁵⁰⁾ HURTADO DE MENDOZA, p. 311.
- ⁽⁵¹⁾ CODOIN, XXVIII, pp. 45-46, carta de Felipe II a don Juan, en la que prefiere que Gutiérrez quede en Granada y no reemplace a Briviesca en el campo militar.
- ⁽⁵²⁾ IVDJ, envío 62 (caja 83), nº 456 y 457, cartas a Espinosa fechadas respectivamente el 26 de noviembre y el 14 de diciembre de 1569. Posteriormente incluso se insinuó que Salablanca estuvo involucrado en las actividades de peculado.

- ⁽⁵³⁾ IVDJ, envío 31 (caja 43), cartas a Espinosa fechadas el 3 de enero y el 23 de agosto, y envío 62 (caja 83), n° 459, 15 de septiembre: "Aquí se deuen muchos dineros, como v^a S^a Illma. lo entenderá por carta del presidente, y la mayor cantidad de ello es de personas necesitadas a quien con mucha razón se deue pagar, y demás desto no hay con qué proueer las cosas necesarias para la prosecución destes negocios, y con no pagar lo que se deue perdemos mucho crédito y la gente de guerra toman por ocasión para yrse que no les pagan...". Las continuas peticiones de dinero de don Juan, CODOIN, XXVIII, pp. 56-59, 110-111, 113, 124-126, 128-130, y 133-134, cartas a Espinosa y a Ruy Gómez.
- ⁽⁵⁴⁾ AZ, carp. 158, n° 45, Pedro de Deza a Espinosa, 12 de enero: "Francisco Gutiérrez va entendiendo lo que toca a la hazienda de su Mag., y ha sido muy necessaria su venida, porque cierto se entiende que es grandíssima la cantidad de hazienda que pertenece a su Magestad, han ydo muchos a tratar della y a cobrar hanse vuelto y no se les toma cuenta, quedándose con lo que han cobrado..."; IVDJ, envío 62 (caja 83), n° 468, carta de Gutiérrez de Cuéllar a Espinosa, 5 de septiembre de 1570, pidiendo la designación de contadores de presidios, pues "acá ha parescido ser cossa muy conueniente que los aya, porque se da de ordinario ración a la gente y se entiende que ha hauido muchos fraudes y hurtos...".
- ⁽⁵⁵⁾ Hasta el 19 de octubre de 1569, cuando se declaró "campo franco", había que contabilizar la contribución correspondiente a un quinto de todas las riquezas que las tropas tomasen de los vencidos (CARO BAROJA, pp. 194-196, informa de las rapiñas que desde entonces se produjeron). Las confiscaciones de propiedades comenzaron poco después de la llegada de Gutiérrez de Cuéllar, con las primeras deportaciones de la ciudad de Granada (MARMOL CARVAJAL, p. 184).
- ⁽⁵⁶⁾ IVDJ, envío 50, fol. 139r, consulta del Consejo de Hacienda proponiendo a Sancho de Andoyn, 24 de enero: "El cardenal nos envió para que se viese en este consejo una carta que el contador Francisco Gutiérrez de Cuéllar scriuió, en que dice que así de los bienes confiscados como de los dineros que se han enviado para las guerra ha entrado mucha cantidad en diversas personas, de que no han dado cuenta, y que conuerna mucho que luego se les tomase, especialmente a los que ya han acabado sus officios y comisiones, porque se entiende que está en su poder cantidad de dineros y otros bienes que sería bien cobrarse...".
- ⁽⁵⁷⁾ IVDJ, envío 62 (caja 83), n° 446; HURTADO DE MENDOZA, p. 312.
- ⁽⁵⁸⁾ CODOIN, XXVIII, pp. 133-134, carta a Ruy Gómez, 14 de agosto de 1570. Semanas antes de había quejado del alcalde Salazar, sustituto de Briviesca a su lado.
- ⁽⁵⁹⁾ IVDJ, envío 62 (caja 83), n° 453, Salablanca a Espinosa, 21 de octubre: "se ha de esperar que quedará asegurado este Reyno y estos moros sin ocasión de yr adelante con su malicia, que aunque las cosas de la hacienda padezcan por ahora, es de menos inconueniente que no aventurar las del estado y de la religión, donde depende todo, que después con buena inteligencia y medios que abrá se podrá yr rehaciendo en breue tiempo lo que toca a la hacienda".
- ⁽⁶⁰⁾ IVDJ, envío 62 (caja 83), n° 462, carta a Espinosa, 9 de noviembre de 1570 (el subrayado es nuestro).
- ⁽⁶¹⁾ CODOIN, XXVIII, pp. 147-148, carta a Felipe II, 19 de noviembre de 1570.
- ⁽⁶²⁾ IVDJ, envío 62 (caja 83), n° 465 y 463, cartas de Gutiérrez de Cuéllar a Espinosa, fechadas el 14 y 19 de noviembre de 1570, respectivamente.
- ⁽⁶³⁾ Cf. M. M. BIRRIEL SALCEDO, "Las instituciones de la repoblación del reino de Granada (1570-1592)", *AHDE* (1988), pp. 185-186, y "Documentos inéditos sobre el Consejo de Población de Granada", *Chronica Nova*, n° 15 (1986-1987), pp. 332-335. En la instrucción al presidente de la Chancillería, Deza, AGS, CC, libro de cédulas 259, fols. 31v-32v, Felipe II

señalaba el 26 de diciembre: "Para lo que toca a la hacienda ha de haber dos personas porque puedan mejor llevar el trabajo y atender con más cuidado y diligencia a lo que fuere necesario, siendo tantas cosas las que ocurrirán en esta materia. Una de ellas ha parecido que sea Francisco Gutiérrez de Cuéllar, al qual daréis la carta que irá con ésta para él, sobre ello hablándole conforme a ella lo que oспareciera conuenir. Y la otra ha de ser Francisco Duarte, fator de la Casa de la Contratación de Sevilla...". A Gutiérrez se le escribió: "Estando las cosas de ese Reyno en el ser que están y hauiéndose de dar orden en ellas y siendo las de la hacienda de la importancia que sabís, ha parecido que vos entendáis en ellas y así os encargamos lo hagáis conforme a lo que os dirá de nuestra parte el presidente de esa audiencia, a quien nos remitimos, que en ellos seremos seruido" (ibídem, fol. 33).

⁽⁶⁴⁾ Para este tema, F. ORIOL CATENA, *La repoblación del reino de Granada después de la expulsión de los moriscos*, Granada 1987 (ed. facsímil del original de 1937), pp. 10-23, 61-66, y los estudios más recientes de M. BARRIOS AGUILERA, *Moriscos y repoblación en las postrimerías de la Granada islámica*, Granada 1993, pp. 43-90, y M. BARRIOS y M.M. BIRRIEL, *La repoblación del reino de Granada después de la expulsión de los moriscos. Fuentes y bibliografía para su estudio. Estado de la cuestión*, Granada 1986.

⁽⁶⁵⁾ IVDJ, envío 22-D, n° 15, carta de Gutiérrez a Espinosa, 22 de junio de 1571, con anotaciones marginales de Felipe II.

⁽⁶⁶⁾ AGS, CC, leg. 2157, n° 189 y 317, y libro de cédulas 259, fol. 121; IVDJ, envío 62 (caja 82), n° 479 y 471, cartas de 20 de junio y 26 de julio de 1571, donde denunciaba "lo poco que se haze en este reyno en todo lo que toca a la población y haciendas de los lugares y términos que los moriscos poseían".

⁽⁶⁷⁾ Los estudios más minuciosos se deben a: M. BIRRIEL SALCEDO, *La tierra de Almuñecar en tiempos de Felipe II: expulsión de moriscos y repoblación*, Granada 1989, esp. pp. 46-60, y J. J. BRAVO CARO, *Felipe II y la repoblación del Reino de Granada. La Taha de Comares*, Granada 1995, pp. 42-50. Las condiciones, según CARO BAROJA, p. 205, fueron muy duras. M. ULLOA, *La hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II*, Madrid 1986 (reed.), p. 532-535, ofrece diversa información sobre el rendimiento de los bienes confiscados.

⁽⁶⁸⁾ IVDJ, envío 62, n° 469, carta a Espinosa, 20 de junio de 1571, encomiando al duque de Arcos. La anotación marginal de Felipe II: "Menester es moderarla más, y así hareis que se trate dello y se verá si será quando el duque de Arcos se venga".

⁽⁶⁹⁾ Ibídem, n° 461, 21 de junio de 1571: "conviene al seruicio de su mag. Que luego se prouean dineros para rehacer y gastecer los presidios y quadrillas que conforme a la reformation han de quedar... también ay grandísima neçesidad de proveer como haya buen recaudo en las guardas y centinelas que ha de haber en las torres porque agora no le hay... Para remedio de todo lo dicho son menester dineros y buena diligencia y cuidado en todo lo que acá se ha de hacer". Tras las advertencias de Gutiérrez de Cuéllar fueron proveídos 12.000 ducados para socorrer a las tropas e instalaciones (ibídem, n° 471 y 475, cartas a Espinosa, fechadas el 26 de julio y 16 de agosto). La posterior disposición de los presidios y gente de guerra, AGS, CC, leg. 2158, n° 158.

⁽⁷⁰⁾ AGS, CC, leg. 2157, n° 126, 147 y 148, cartas a Espinosa de enero de 1571, y n° 183, a Felipe II, 5 de marzo.

⁽⁷¹⁾ IVDJ, envío 22-D, n° 5-6, y envío 62 (caja 83), n° 469, carta a Espinosa, 20 de junio de 1571.

⁽⁷²⁾ IVDJ, envío 62 (caja 83), n° 472, carta a Francisco de Soto, 26 de julio de 1571. Salablanca había escrito a Felipe II sobre la toma de cuentas, y consideraba que los desórdenes y exce-

nos no se habían verificado, y que no eran relevantes en "jornada tan larga y trauajosa" (AGS, CC, leg. 2157, nº 172, 4 de marzo de 1571).

⁽⁷³⁾ AGS, CC, libro de cédulas 259, fol. 62r, y leg. 2157, nº 154 y 173.

⁽⁷⁴⁾ Tras su exposición, el 27 de septiembre de 1571 se enviaron a Granada nuevas disposiciones sobre seguridad militar y vigilancia, suministros y provisiones, condiciones de población, y control administrativo y contable (AGS, CC, libro de cédulas 259, fols. 123r-127r, transcrito por BIRRIEL SALCEDO, *La tierra de Almuñecar...*, pp. 284-293).

⁽⁷⁵⁾ Para las situaciones política y financiera descritas, J. MARTÍNEZ MILLÁN y C. J. DE CARLOS MORALES, dirs., *Felipe II (1527-1598): la configuración de la Monarquía hispana*, Valladolid 1998, pp. 164-173.

⁽⁷⁶⁾ AGS, CC, leg. 444, nº 25 y 27, sin fecha ni firma, hológrafos de Gutiérrez de Cuéllar.

⁽⁷⁷⁾ AGS, CG, leg. 309, sin foliar. Véanse los trabajos de F. RUIZ MARTÍN, "Las finanzas españolas durante el reinado de Felipe II", *Cuadernos de Historia, Anexo Hispania*, nº 2 (1968), pp. 114-173, y A. W. LOVETT, "The Castilian bankruptcy of 1575", *The Historical Journal*, 23 (1980), pp. 899-911, que pretendió, sin conseguirlo, corregir al anterior.

⁽⁷⁸⁾ IVDJ, envío 72, III, fols. 32-34.

⁽⁷⁹⁾ IVDJ, envío 31 (caja 43), Gutiérrez de Cuéllar a Mateo Vázquez, sin datar.

⁽⁸⁰⁾ BPUG, CEF, vol. XXXII, fol. 6. Algo posterior y con tenor semejante, IVDJ, envío 22-D, fajo 29.

⁽⁸¹⁾ IVDJ, envío 53 (caja 69), fajo 4, nº 215, anotación marginal de Felipe II en carta emitida por su secretario. Finalmente el elegido fue Juan Bernaldo de Quirós, y posteriormente se incorporó también el fiscal Pedro de Liévana.

⁽⁸²⁾ IVDJ, envío 31 (caja 43), sin foliar, Gutiérrez de Cuéllar a Mateo Vázquez, el 29 de diciembre comentaba que acababan de conocer el contenido del decreto; AZ, carp. 164, nº 3, Covarrubias a Felipe II, 2 de enero de 1576, "El licenciado Avalos vino la víspera de Año Nuevo y ha comenzado ya a tratar de lo que V. R. M. ha mandado trate"; así lo comentaba también Gutiérrez de Cuéllar a Mateo Vázquez, BPUG, loc. cit., fol. 320, 3 de enero.

⁽⁸³⁾ BPUG, loc. cit., fol. 13, Gutiérrez a Mateo Vázquez, 20 de diciembre, "yo entiendo que mi asistencia con el lido. Avalos ha de ser para ver, ordenar y entender lo que se ha de hacer y que los otros cuatro nombrados han de tomar las cuentas de dos en dos y ocurrir al lido. Avalos y a my con las dudas, y creo que esto será el intento de Su Mag., porque nosotros no hemos de glosar ni parece que este trabajo se nos querrá dar, sino que hagamos allí lo que los Contadores mayores hacen en la contaduría de cuentas...". Respecto al enlace que hacían entre ambas juntas, C. RIBA GARCIA, *Correspondencia privada de Felipe II con su secretario Mateo Vázquez (1567-1591)*, Madrid 1959, pp. 25-26.

⁽⁸⁴⁾ BPUG, loc. cit., fol. 263?, Gutiérrez de Cuéllar a Felipe II, 18 de febrero, fol. 293, 6 de marzo, idem, "Los negocios de hacienda se tratan divididamente unos en Consejo y otros en la junta de los seys, y la división que de ellos se haze aplicando los unos a una parte y los otros a otra me dizen que es por orden del contador Garnica, y según esto él la deve tener de V. Md., pero si no es así convendría que se viese y se determinase cómo y qué cosas se an de tratar en una parte y en la otra... y como tengo significado en otro memorial creo que sería bien reducillo todo a una solo junta o consejo donde aya las personas que más convenga al servicio de V. Mag", fols. 249, "hizo ver Garnica tress memoriales de Lorenzo Spínola... y pide le mande V. Md. pagar de que se le debe como sino hobiera decreto...; me ha parecido advertir de que los negocios que tocan a este ginovés a mi parecer se tratan por alguno de las juntas y consejo con demasiada afición...", y fols. 133, 143, 162, 170, 182, 215, 261, 275,

284, 299, 405, 407; IVDJ, envío 31 (caja 43), s.f., carta a Mateo Vázquez, 14 de marzo; AZ, carp. 138, n° 183, idem, 19 de junio; RIBA, pp. 34-36.

⁽⁸⁵⁾ BPUG, loc. cit., fols. 281 y 73; IVDJ, envío 31 (caja 43), sin foliar, cartas a Mateo Vázquez de 20 de mayo, 2 y 17 de junio de 1574).

⁽⁸⁶⁾ AVDV, armario 6, leg. 22, carta a Felipe II, 15 de abril; IVDJ, envío 24 (caja 37), n° 132.

⁽⁸⁷⁾ BPUG, loc. cit., fol. 318, Francisco Gutiérrez de Cuéllar a Mateo Vázquez, 6 de enero; IVDJ, envío 76, fols. 615-616r, Garnica a Felipe II, aceptando ceder dicha información pero negándose a entregar sus libros de teniente de la Contaduría mayor; el balance, AGS, CMC, 3ª época, leg. 81; IVDJ, envío 33 (caja 46), docs. 70-74, terminado el 9 de enero, su elaboración corrió a cargo de Vivanco, oficial de Garnica.

⁽⁸⁸⁾ IVDJ, envío 76, fols. 634-635. Entre quienes participaron en las 296 operaciones destacaban, entre los extranjeros, Nicolao de Grimaldo, con 35, Lucian Centurión, con 34, y Lorenzo Spínola, con 32; entre los españoles, Curiel de la Torre, con 20, y Fernández de Espinosa, con 12.

⁽⁸⁹⁾ IVDJ, envío 76, fol. 585, y envío 33 (caja 46), docs. 30-69 (sin foliar entre sí).

⁽⁹⁰⁾ IVDJ, envío 76, fols. 617-619.

⁽⁹¹⁾ BPUG, loc. cit., fol. 318; IVDJ, envío 33 (caja 46), docs. 30-69, Avalos a Felipe II, sin fechar; ULLOA, p. 762.

⁽⁹²⁾ IVDJ, envío 33 (caja 46), loc. cit., Avalos a Felipe II, cartas de 12 y 15 de enero.

⁽⁹³⁾ IVDJ, envío 76, fols. 567-568, Mateo Vázquez a Felipe II, 31 de enero.

⁽⁹⁴⁾ IVDJ, envío 33 (caja 46), sin foliar.

⁽⁹⁵⁾ IVDJ, envío 76, fol. 587, Mateo Vázquez a Felipe II, 2 de febrero: "En la Junta de esta tarde propuso Francisco Gutiérrez de Cuéllar que en la forma que se auía de tener en la quenta de los ynteresses él dudaua de cómo se auía de entender por los capítulos que en ello hablan, pareciéndole que si se hiziese conforme a la yntención y entendimiento que se auía dado en otra junta, por algunos de ella, sería más dañoso a la Hazienda de su Mag. de lo que conforme a los capítulos del decreto se deua entender, y que a él le parecía y lo entendía de esta manera, que las pagas que los mercaderes uiiesen recibido de las consignaciones, todas enteramente, se auían de poder a quenta del principal, y lo que se les uiiese de cargar de juros de resguardos vendidos y de facultades para crecimiento y mudanças de juros y licencias de sacas y otras adehalas, que por compensación se auía de rescontrar con principal y ynteresses pro rata, y no como en la dicha junta auía parecido que de qualesquiera de las pagas que se hiziesen de las consignaciones se pagase solamente el interesse y lo que restase fuesse para la suerte principal, y auíéndose oy platicado y conferido sobre ello declaró y determinó que todo lo que se cargase a los mercaderes assí de las pagas de las consignaciones como por compensación de los juros y adehalas se rescontrase con el principal y enteresses pro rata, guardando en la forma de la quenta el stilo y orden que en semejantes casos se ha tenido en la Contaduría mayor de Quentas hasta agora".

⁽⁹⁶⁾ IVDJ, envío 33 (caja 46), loc. cit.

⁽⁹⁷⁾ RIBA GARCIA, pp. 37-38, Mateo Vázquez a Felipe II, 1 de abril; IVDJ, envío 76, fol. 573, idem, citando los posibles medios y arbitrios al efecto y requiriendo que se pensara "si ha de ser de voluntad de los que alcançaren y preçediendo conçierto y trato sobre ello, o no". Según Avalos de Sotomayor, IVDJ, envío 33 (caja 46), loc. cit., carta a Felipe II: "aunque es assí que la reformation que el decreto ha hecho en todos los assientos quitará y aliuará a V. Mg. mucha parte de la duda de ellos, todavía se tiene por muy cierto que les queda V. Mg. a deuer

grandes summas y quantidades de dinero... y aunque no se puede decir a V. Mg. con fundamento cierto lo que montará la deuda que se quedará a deuer a estos mercaderes porque esto ha de depender del fenecimiento final de sus quantas, se tiene por caso notorio y sin ninguna duda que por lo menos serán más de seis millones de ducados, que corriendo de estos a XII por ciento al año, hasta que se paguen vernía a montan el interese de ellos setecientos y veinte mill ducados cada año".

⁽⁹⁸⁾ IVDJ, envío 76, fols. 569-572, carta de Vázquez de Salazar a Felipe II, 30 de mayo, y envío 33 (caja 46), sin foliar.

⁽⁹⁹⁾ AGS, CG, leg. 309. RUIZ MARTÍN, "Las finanzas españolas...", pp. 152-153, señala que la cédula de julio de 1576 fue el empujón que hizo perder soberbia a los genoveses, compeli-dos así a modificar su fogoso comportamiento ante la Corona.

⁽¹⁰⁰⁾ IVDJ, envío 33 (caja 46), n° 33-69, carta a Felipe II, s.d. En este mismo sentido, Ibídem, Ava-los al monarca, 29 de noviembre.

⁽¹⁰¹⁾ IVDJ, envío 33 (caja 46), en diversos documentos. La diferencia entre contabilizar la deuda conforme al decreto o según las condiciones originales de cada contrato crediticio, en el caso de los Grimaldi, Curiel de la Torre, L. Centurione y A. Spínola, RUIZ MARTÍN, "Las finan-zas...", p. 151.

⁽¹⁰²⁾ IVDJ, envío 33 (caja 46), loc. cit.; AGS, CC, leg. 444, fajo 44.

⁽¹⁰³⁾ AVDV, loc. cit., carta del 12 de julio a Felipe II.

⁽¹⁰⁴⁾ AGS, CC, leg. 450, sin foliar; IVDJ, envío 24 (caja 37), fol. 123, Avalos a Mateo Vázquez, 20 de septiembre de 1576, y envío 33 (caja 46), n° 30-69; RIBA GARCÍA, pp. 64-66.

⁽¹⁰⁵⁾ AGS, CC, leg. 450, s.f., minuta de la sesión del 10 de agosto de la *Junta*. Esa misma cues-tión había sido considerada por Requesens, IVDJ, envío 22-B, fols. 335-338, carta a Zabala, entre sus críticas contra el decreto.

⁽¹⁰⁶⁾ RIBA GARCÍA, pp. 64-66, Felipe II a Mateo Vázquez, 27 de octubre de 1576, comentando la conveniencia de tomar medio general ya que sino "andaremos toda la vida embaraçados con este negocio, y lo del tanteo haziéndose sin partes, no creo que puede ser cierto".

⁽¹⁰⁷⁾ IVDJ, envío 76, fols. 625-626, 12 de diciembre de 1576, "Pareceres sobre si se tomará medio general o no con mercaderes y hombres de negocios a quienes ha tocado el decreto".

⁽¹⁰⁸⁾ Sobre el desarrollo de las operaciones, BPUG, loc. cit., fols. 407, 532, 143, 130, 128, 483, cartas de Gutiérrez de Cuéllar (citadas en su orden cronológico); e IVDJ, envío 31 (caja 43), s.f., correspondencia de Avalos con Mateo Vázquez.

⁽¹⁰⁹⁾ BPUG, loc. cit., fol. 118, carta a Vázquez, 26 de diciembre; IVDJ, envío 31 (caja 43), idem, 29 de diciembre: "an los reçevido algunos de mala gana y otros no an querido yr por ellos"

⁽¹¹⁰⁾ AGS, CC, leg. 444, fajos 22, 26, 27, 35, 36, y 44, "Relación de lo que las personas compre-hendidas en el decreto pretenden de agrauios contra la ynteligencia que en él se ha tenido por los comisarios de las quantas".

⁽¹¹¹⁾ IVDJ, envío 76, fols. 629-631, Garnica a Felipe II, 13 de diciembre.

⁽¹¹²⁾ BPUG, loc. cit., fol. 509, carta a Mateo Vázquez, 9 de febrero.

⁽¹¹³⁾ Ibídem, fol. 507: "Oy se an juntado estos señores presidentes y se an resuelto en que a los del decreto no se les carguen réditos de los juros del tiempo en que no hobiere con que res-contrar el principal para estinguir ynteresses, que es lo contrario de lo que antes havían deter-minado, y por haverse hecho los tanteos conforme a la primera determinación, se habrán de tomar a enmendar las quantas y será mucho el ynterese en favor de los decretados...".

- ⁽¹¹⁴⁾ AGS, CG, leg. 309, copia. Se ocupó del tema A. W. LOVETT, "The general settlement of 1577: an aspect of spanish finance in the Early Modern period", *The Historical Journal*, 25 (1982), pp. 1-22, pero puede encontrarse un análisis detallado de todo lo anterior y de los sucesos acaecidos hasta diciembre, MARTINEZ MILLÁN y CARLOS MORALES, *Felipe II...*, op. cit., pp. 182-200.
- ⁽¹¹⁵⁾ Sobre este personaje, C. J. DE CARLOS MORALES, "Finanzas y relaciones clientelares en la corte de Felipe II: Juan Fernández de Espinosa, banquero y ministro del rey", en *Política, religión e inquisición en la España moderna*, Madrid 1996, pp. 221-237.
- ⁽¹¹⁶⁾ BPUG, loc. cit., fols. 452, 462, 401, y 399, cartas a Mateo Vázquez, 18 de mayo, 2 de junio y 17 de septiembre, y fol. 399, y fols. 424-425 y 338, cartas a Felipe II, del 20 de julio y sin datar.
- ⁽¹¹⁷⁾ AVDV, loc. cit., anotación marginal de Felipe II, por mano de Mateo Vázquez, en una de las tres cartas que le remitiera Garnica el 8 de septiembre. La copia del convenio, AGS, CG, leg. 309, con las rúbricas de los miembros de la *junta del medio general*, excepto la de Covarrubias, fallecido en octubre.
- ⁽¹¹⁸⁾ IVDJ, envío 24 (caja 37), n° 144: de Gutiérrez señalaba que "Francisco Gutiérrez de Cuéllar es limpio, a lo que yo entiendo, y para es buen consejero en aquellas materias, mas no tiene tanta inteligencia en otras ..".
- ⁽¹¹⁹⁾ AGS, QC, leg. 17. Su plaza en la Contaduría mayor de Cuentas fue cubierta por Francisco de Salablanca.
- ⁽¹²⁰⁾ Según refiriera Vega a Mateo Vázquez, IVDJ, envío 76 (caja 102), fol. 293.
- ⁽¹²¹⁾ AZ, carp. 139, n° 157, la petición de la licencia el 25 de mayo, concedida para julio y agosto.